

**20° SIMPOSIO DE LEGISLACION TRIBUTARIA ARGENTINA**  
**CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS**  
**AIRES**  
**Octubre de 2018**

**COMISION N° 2: "Reforma del Impuesto a las Ganancias"**

**Subtemas a tratar: Renta Financiera, Fiscalización Internacional, Renta Corporativa, Inmuebles**

**INFORME DEL RELATOR**

**I. INTRODUCCION**

Nos enfrentamos con la delicada y por demás compleja tarea de analizar, de una manera que podríamos calificar "cada vez menos preliminar", algunos (quizás los más importantes) de los numerosos y profundos cambios introducidos en la Ley del Impuesto a las Ganancias (LIG) por la Ley de Reforma Tributaria de fines de 2017 (Ley N° 27.430).

Se trata de un desafío profesional por demás significativo, debido no solamente a la gran cantidad de normas involucradas, sino además por la profundidad de los cambios adoptados y por la complejidad de las cuestiones tratadas y de la maraña de disposiciones interconectadas entre sí que deben considerarse para arribar a una conclusión sobre el tratamiento integral de determinada ganancia.

Es por tales razones que al trazar las directivas de relatoría se señaló que este Simposio conlleva una excelente oportunidad, para todos los aquí presentes, de hacer un importante aporte en el análisis y difusión de la reforma y en las propuestas de reglamentación.

Por fortuna para este relato y para el conspicuo auditorio que nos acompaña, contamos con el inestimable aporte de los trabajos presentados por, las exposiciones de, y la conducción de esta Comisión, por parte de los más destacados especialistas de la materia. A todos ellos llegue el especial agradecimiento de quien esto escribe, por haber facilitado enormemente la elaboración de este informe (no obstante lo cual se solicita la condescendencia del lector para este trabajo, para el caso de incurrir en omisiones respecto de cuestiones que consideren relevantes).

Es opinión de este relator que, estando en vigor la ley (no sin premura, por cierto), lo más provechoso resultará avocarse al análisis de su aplicación práctica y concreta, más que a las consideraciones de naturaleza teórica, lo que no implica cercenar de raíz las inquietudes que los colegas manifiesten desde tal plano, sino más bien una suerte de recomendación sobre la manera de aprovechar mejor nuestro escaso tiempo.

**Como cuestión de previa y especial consideración, es preciso destacar que, a la fecha de elaboración de este informe, no ha sido publicada la reglamentación del nuevo texto legal (o, de haberlo sido en el ínterin hasta la celebración del Simposio, no se contó con tiempo suficiente para su adecuado análisis). Ello obligará a rever las consideraciones efectuadas, a la luz de las normas reglamentarias oportunamente dictadas.**

**II. OPERACIONES CON INMUEBLES**

Diversas consideraciones avalan la incorporación del nuevo objeto del impuesto regulado por el artículo 2º, inciso 5), de la LIG, constituido por los resultados derivados de la enajenación de

inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

Entre ellas podemos mencionar:

- 1) La inexistencia de un tributo específico que gravara este tipo de ganancias de capital, con la inequidad que ello conlleva.
- 2) La inequidad del rudimentario impuesto a la transferencia de inmuebles, que no grava ganancias sino precio bruto.
- 3) La legislación comparada, en particular la de nuestros vecinos latinoamericanos.
- 4) La tradición tributaria imperante en nuestro país durante muchos años.

Podría quizás criticarse la inclusión de estas ganancias en el ámbito del impuesto a las ganancias (bien que con una cederularidad, harto extendida, que le otorga ribetes de tributo diferenciado), en lugar de (re)crearse un impuesto específico como fuera el que gravara "los beneficios eventuales", pero lo cierto y plausible es la creación de esta imposición a tasa atenuada sobre ganancias de capital, que brinda mayor equidad al sistema tributario.

Cabe mencionar que las aclaraciones efectuadas en el segundo párrafo del artículo 3º LIG (concepto de enajenación de inmuebles), en cuanto a dar efecto simétrico a la venta y a la compra, en nada alteran el statu quo anterior, habiéndose quizás perdido la oportunidad de introducir pautas para configurar el concepto de transferencia de derechos, a la luz del nuevo objeto del impuesto.

## **II.1. Cuestiones atinentes a la definición del objeto del impuesto**

A poco que se aborda el análisis de este nuevo objeto del impuesto, comienzan a vislumbrarse cuestiones controvertidas.

La primera de ellas, como señala Luis Omar Fernández en su trabajo, es la "modernidad" de las normas de fondo, es decir la regulación de los conceptos jurídicos subyacentes emergente del reciente Código Civil y Comercial, lo que hace que dichas normas no hayan sido aún objeto de análisis "definitivo" (si se permite la expresión) por parte de los civilistas. Por nuestra parte se agrega que lo propio ocurre en materia específicamente tributaria, lo que torna bastante más provisionales las conclusiones que se extraigan sobre su tratamiento.

Una segunda cuestión, dentro de esa línea, reside en establecer la definición legal aplicable en el caso de operaciones con bienes situados en el exterior. Fernández se inclina por la aplicación de la normativa del país de ubicación del bien, por lo que resta aguardar su oportuna fundamentación.

En cuanto a la falta de precisión terminológica de la norma, al emplear sucesivamente las expresiones "enajenación" y "transferencia" (que es motivo de crítica por parte de Fernández), como el propio autor reconoce más tarde no provocaría confusiones insalvables en la aplicación del tributo, dado que la principal distinción que debe hacerse, para diferenciar las rentas sometidas al impuesto progresivo, dentro de la primera categoría de ganancias, de las sometidas al impuesto cedular a las ganancias de capital, estaría dada por la "constitución" a favor de terceros de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales, conforme enuncia el inciso b) del artículo 41 LIG.

Por cierto que la inclusión en la primera categoría de las ganancias provenientes de la constitución de derechos de superficie da solución al vacío generado con la creación de este último derecho; solución que en opinión de quién esto escribe es válida desde dicha creación.

La distinción entre bienes inmuebles y muebles adheridos al suelo, podría no resultar demasiado relevante, en tanto las ganancias provenientes de la enajenación de ambos tipos de bienes estarían comprendidas en el objeto del impuesto. Sobre esta cuestión nos ilustrará en detalle la exposición de Alberto Mastandrea.

## **II.2. Cuestiones vinculadas con el sujeto del nuevo objeto**

Diversas cuestiones controversiales presenta la delimitación de los sujetos comprendidos en el hecho imponible que nos ocupa.

Ello así como producto de una -al menos- imprecisa redacción del inciso en cuestión, al emplear la expresión "cualquiera sea el sujeto que las obtenga". Cabe mencionar que se repite así la expresión empleada en el inciso 3), referida a la enajenación de bienes muebles amortizables.

En una primera aproximación al tema, podría señalarse que esa expresión se utilizó apuntando a comprender a los sujetos "no empresa", ya que para éstos las ganancias en cuestión -tanto las del inciso 3) como las del 5)- están comprendidas en la denominada "teoría del balance" y, por ende, sometidas al impuesto en virtud de las disposiciones del inciso 2) del artículo 2º LIG. Téngase presente que la función de los incisos 3), 4) y 5) de dicho artículo es la de ampliar los alcances de los dos primeros incisos y no superponerse con ellos, de modo de captar manifestaciones de ganancia (capacidad contributiva) que de otro modo quedarían fuera de la imposición (de allí que nuestra visión sea que se trata de incisos "residuales"); desde otro punto de vista, los incisos precedentes, más abarcativos, no contienen previsión alguna respecto de no comprender aquellas ganancias enunciadas en los incisos sucesivos.

La distinción no es menor, ya que de ella se deriva la alícuota aplicable a este tipo de ganancias (la cédular del 15% o bien la progresiva del artículo 90) para los sujetos que hacen habitualidad en la compraventa de inmuebles. Téngase presente que siguen estando comprendidas en la tercera categoría de ganancias, no requiriendo la característica de habitualidad real, las siguientes operaciones enunciadas en el inciso f) del artículo 49 LIG (que sufriera algunas adecuaciones en la reforma con motivo de la creación de nuevas figuras contractuales en el derecho de fondo):

- loteos con fines de urbanización
- edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal
- desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios.

Un método de razonamiento que deja atrás la falta de claridad de la norma, es el siguiente:

- 1) Los inmuebles destinados a la compraventa en forma habitual constituyen bienes de cambio y el sujeto que lleva a cabo la actividad debe ser calificado como "empresa" (por ende comprendido en el inciso 2) del artículo 2º LIG).
- 2) Los inmuebles son una especie más del género de los bienes de cambio, que no presentan ninguna característica distintiva que amerite otorgarle, a las ganancias que producen, un tratamiento diferente al que reciben las generadas por otros bienes de cambio.
- 3) No existen argumentos doctrinarios y/o de política fiscal que avalen otorgar un tratamiento preferencial a las ganancias por la compraventa habitual de bienes de cambio inmobiliarios (al

menos quien esto escribe no las conoce), que por cierto ya se encontraban gravadas a la tasa progresiva antes de la reforma<sup>1</sup>.

Cabe abrir aquí un paréntesis, para considerar si la expresión “conjuntos inmobiliarios” empleada para delimitar las ganancias de la tercera categoría se refiere al género (comprendivo además de los “tiempos compartidos” y cementerios privados) o bien a la especie, cuestión sobre la que Fernández se explayará y expondrá su visión; como me lo hiciera notar la Presidente, Dra. Mónica Yerise, la enunciación de derechos reales contenida en el art. 1887 del Código Civil y Comercial comprende a cada uno de los tres tipos mencionados, lo que llevaría a concluir que la referencia de la LIG es a los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, como especie del género. Cabe no obstante criticar la ambigüedad del texto legal, por un lado, y la falta de inclusión expresa de los otros dos tipos o especies de derechos reales, las cuales no presentan diferencias relevantes con la primera, constituyendo el desarrollo de tales emprendimientos, todos ellos, típicas estructuras empresariales.

En segundo lugar nos encontramos con la problemática de las personas humanas residentes en el exterior y las sucesiones indivisas allí radicadas.

No parece haber dudas en cuanto a que el artículo 2º LIG debe necesariamente incluir a los beneficiarios del exterior, ya que en caso contrario tales sujetos no contarían con una definición del objeto del impuesto, tornándolo inaplicable (lo que evidente y claramente no ha sido así hasta el presente).

Ahora bien, la inclusión de los beneficiarios del exterior en el art. 2º LIG, principio del cual el inciso 5) no podría resultar una excepción -más allá de que, tratándose de sujetos empresa podría discutirse si están comprendidos en el inciso 2) o bien en el 1); el segundo párrafo del artículo 8º del decreto reglamentario “antiguo” llevaría a concluir que en el inciso 2) estarían solamente las sociedades y empresas o explotaciones situadas en nuestro país-, no soluciona por sí sola la problemática de la alícuota aplicable a las operaciones comprendidas en aquél.

La cuestión es analizada por Mastandrea y Fernández; adelanto no obstante mi posición, en el sentido de que:

- i) No existen dudas de que tratándose de sociedades y otros sujetos empresa se aplicará la tasa proporcional del 35% (art. 92) y la presunción de ganancia neta del 50% -inciso g) del art. 93-. Las ganancias provenientes de las transferencias de derechos diferentes del dominio también estarían comprendidas en dicho inciso, en tanto se trata de “bienes situados” en nuestro país.
- ii) En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, los alcances del artículo 90.5 LIG según su texto no permiten dejar sin efecto la norma genérica del art. 92 aplicable a los beneficiarios del exterior, como así tampoco pasar por alto la antes mencionada presunción (sin perjuicio de optar por la determinación sobre base real, en cuyo caso cobraría vigor la remisión a la forma determinativa enunciada por el art. 90.5). En caso de que la reglamentación pretendiera aclarar que se aplica la alícuota del impuesto cedular, cabría preguntarse si ello sería legal (más allá de que ningún contribuyente lo cuestionaría).

Otro aspecto interesante y controvertido se desprende de la reflexión del trabajo de Fernández, en el sentido de que “cuando cualquiera de estas operaciones sea realizada por un

---

<sup>1</sup> Teniendo en cuenta que las pautas de “habitualidad” siguen siendo de relevancia para establecer el objeto del tributo en determinadas circunstancias, resulta notoria la ausencia de regulaciones legales para delinear tales pautas generales, que permitan establecer su existencia.

monotributista, dentro de las actividades incluidas en dicho régimen, los resultados estarán exentos de impuesto a las ganancias". Esta consideración debería complementarse con el propio objeto del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, **el que no incluye las operaciones de compraventa de inmuebles.**

Por su propia definición, las ganancias del tipo de las que nos ocupan no deberían ser consideradas de la tercera categoría. Así lo afirma también Fernández, aunque sin fundamentarlo explícitamente. Esta concepción se asentaría en la idea de que el sujeto involucrado en el hecho imponible definido por el inciso 5) del artículo 2º LIG no es a priori una empresa ni un sujeto habitualista, concepción íntimamente ligada a la definición del tipo impositivo aplicable a estas ganancias como ya quedara expresado.

### **II.3. Otras cuestiones que requieren definición**

#### **II.3. 1. Operaciones que involucran la transmisión de dominio fiduciario**

Sostiene Fernández, en cuestión para debatir: "En el caso de fideicomisos ordinarios, deben distinguirse por su diferente tratamiento legal aquellos en los que el fiduciante es beneficiario, de los que tienen como beneficiarios a terceros o el fiduciante beneficiario es residente en el exterior (Título V de la ley del impuesto). En los primeros, desde el punto de vista tributario, no hay transferencia de inmueble alguna ya que, si bien el fideicomiso es un patrimonio separado, sus ganancias las declara el fiduciante beneficiario y, a su término, el bien volverá al mismo. Por su parte, cuando el beneficiario no sea el fiduciante, la transferencia del inmueble al fideicomiso constituirá una enajenación y las transferencias de bienes a los beneficiarios están alcanzadas por las normas de art. 69 inc. a) punto 6."

En la primera afirmación estaría implícita la inexistencia de hecho imponible frente al impuesto a las ganancias.

#### **II.3.2. Afectación de inmuebles a derechos reales de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios**

Como señala Fernández, resulta fundamental analizar en estos casos si subsiste el derecho de dominio por parte del propietario afectante, o si -por el contrario- se crea un nuevo derecho y la cesión del anterior debe considerarse un hecho gravado por el inciso que nos ocupa.

#### **II.3.3. Hipotecas y anticresis**

Sostiene Fernández que los derechos reales de hipoteca y anticresis sobre inmuebles, son accesorios del crédito que aseguran y que, para ambos, debe analizarse si lo que se garantiza es una operación propia o ajena.

En el primer caso, la constitución de hipoteca no constituirá una operación gravada, sea porque no se la conciba como un hecho comprendido en el objeto del impuesto o bien, aún encuadrándola en la primera categoría (como sostiene Fernández), no exista base imponible.

Fernández se explaya sobre los casos de constitución onerosa de hipoteca en beneficio de un tercero, encuadrando tal renta en la primera categoría, pues está allí explícitamente incluida como hecho imponible, mientras que el resultado de la transferencia onerosa de una hipoteca existente se tratará como renta de la 2ª categoría.

Coincidimos con Fernández en cuanto a que la cesión de créditos hipotecarios no es una operación comprendida en el inciso 5) del art. 2º LIG.

La figura del segundo derecho real de garantía regulado por el Código Civil y Comercial, esto es la anticresis, ha sido poco explorada en general por la doctrina. Se trata del derecho que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda.

De las regulaciones de los artículos 2215 y 2216 del CCyC (imputación de frutos, rendición de cuentas al deudor, explotación por el deudor una vez pagada la deuda, aplicación de las reglas del mandato), se desprendería que tales frutos constituyen ganancia de la primera categoría para el deudor titular originario de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie o usufructo, que es quien está legitimado para constituir anticresis.

La prenda no se incluye en el análisis de los derechos reales de garantía, por cuanto solo se puede constituir sobre bienes muebles registrables o créditos instrumentados, es decir nunca sobre inmuebles.

#### **II.3.4. Los llamados “derechos personales”**

A pesar de que la única referencia que hace la ley (art. 45, inciso b) es a los denominados “derechos reales”, regulados por el Código Civil y Comercial, la doctrina es en general conteste en afirmar que la cesión de los denominados “derechos personales” (o creditorios) que involucran inmuebles, está comprendida en el nuevo objeto del impuesto a las ganancias. Ello implica que las cesiones de boletos de compraventa de inmuebles de los cuales no se cuenta con posesión, están comprendidas en el inciso y las ganancias que generen, gravadas.

#### **II.3.5. Alcances de la exención para la venta de la casa habitación**

Con relación a las operaciones del título, cuya exención se establece por el inciso o) del artículo 20 LIG, se presentan, al menos, dos cuestiones para resolver, ambas abordadas por Mastandrea:

i) Si el destino de vivienda debería o no ser exclusivo, y en caso negativo, cómo se tratan las ganancias cuando se venden bienes con destino “compartido”.

La ausencia de la condición de destino exclusivo en la ley impide que se prive de la exención a los casos de destino compartido, debiendo la reglamentación, en mi opinión, establecer la forma de determinar la proporción de ganancia exenta y gravada.

ii) El tratamiento aplicable a las viviendas complementarias o de fines de semana. Siendo la esencia de su uso asimilable a la casa habitación “principal”, su tratamiento fiscal no debería resultar diferente.

Mastandrea expondrá criterios divergentes a los aquí expresados.

#### **II.3.6. Determinación de la ganancia neta.**

##### **II.3.6.1. Valor locativo de mercado**

La referencia legal incorporada al artículo 42 LIG, cuya nueva redacción apunta a considerar el valor locativo de mercado como pauta de imposición, requiere la elaboración de pautas prácticas para su aplicación concreta en los diferentes escenarios que se presentarán.

### **II.3.6.2. Ventas en cuotas o a plazos**

#### **II.3.6.2.1. Imputación por lo percibido**

Teniendo en cuenta las disposiciones de la ley para las rentas que nos ocupan, en cuanto a su imputación por el criterio de “percibido” (Mastandrea nos amplía el análisis de este tópico) y la proporcionalidad de la ganancia en el caso de ventas en cuotas, cabe plantear la problemática de cómo imputar aquellos gastos incurridos en un momento posterior al acto de enajenación; en rigor serían gastos posteriores a la percepción de la primera cuota. Aquí se abre la alternativa de proyectar los gastos totales de la operación, a fin de prorratarlos entre todas las cuotas, desde la primera inclusive (¿y deducirlos proporcionalmente aún antes de haberlos pagado ...?).

#### **II.3.6.2.2. Intereses por financiación**

Por así disponerlo expresamente el art. 90.5 de la LIG, procede la segregación e imposición separada conforme el tratamiento general de la ley, de los componentes financieros derivados del diferimiento en las operaciones a plazo, conforme el tratamiento que tradicionalmente se ha dado a tales resultados.

En tal sentido, cabe mencionar que sigue estando vigente el artículo 48 LIG (presunción que no admite prueba en contrario en los casos de venta de inmuebles), el que no ha sido modificado.

#### **II.3.6.2.3. Operaciones en moneda extranjera**

En consonancia con lo sostenido por Mastandrea y empleando sus propias palabras, “Respecto de las diferencias de cambio que pudieran generarse como consecuencia de una eventual devaluación entre la fecha de venta del inmueble y la fecha de percepción de la operación, entendemos que quedarán alcanzadas por el impuesto cedular bajo análisis por aplicación de lo previsto en el primer párrafo del inciso v) del artículo 20”, fundando tal conclusión en la remisión que el artículo 90.7 de la LIG efectúa, respecto de la aplicación del Título I de la Ley.

#### **II.3.6.3. Bienes recibidos por herencia, legado o donación**

Mastandrea analiza la legalidad de una disposición reglamentaria que atrape la valorización experimentada por una propiedad entre la fecha de su adquisición original y el fallecimiento (caso de herencias y legados) o acto de donación del bien.

Si bien la norma legal podría crear un hecho imponible como el descripto (afirmación que no implica sostener que ello haya ocurrido efectivamente), desde un punto de vista teórico parecería que esa utilidad no se ha verificado en cabeza del heredero, legatario o donatario, quedando fuera del ámbito de imposición a las ganancias.

#### **II.3.6.4. Deducción de impuestos**

Mastandrea sostiene que “no serían deducibles aquellos gastos que se hubieran imputado contra las rentas generadas por el inmueble durante su estadía en el patrimonio, tales como: (i) el Impuesto sobre los Bienes Personales, (ii) Impuestos Inmobiliarios y Municipales, (iii) Expensas ordinarias y extraordinarias; ni aquellos soportados como consecuencia del uso y/o goce del bien cuando estamos frente a inmuebles no afectados a la generación de ganancias.”

En sentido inverso cabe preguntarse qué tratamiento debería darse en el caso de inmuebles que no generaron rentas ni tampoco fueron motivo de uso o goce, como sería el caso de inmuebles



mantenidos como inversión, existiendo argumentos para defender la deducción de los mismos, basados en la realidad económica de la operación (la ganancia de capital realmente obtenida debe tener en consideración los gastos que generó la inversión), así como en que el art. 90.5 define el concepto de ganancia bruta y no neta, y en la remisión al artículo 17 LIG (que admite la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia, mantener y conservar la fuente productora, para determinar la ganancia neta) que surge del art. 90.7. Nota al pie: este último omite la remisión al Título III (Deducciones); ¿cuál habrá sido su intención ...? La cuestión se reitera en los restantes impuestos cedulares que serán tratados más adelante.

### **II.3.7. Normas de transición**

La coexistencia temporal de los dos regímenes de imposición (impuesto a la transferencia de inmuebles -ITI- e impuesto a las ganancias cedular) obliga a dictar normas reglamentarias de transición, sobre las cuales comenta Mastandrea.

En tal sentido, no caben dudas de que habiendo adquirido la “propiedad tributaria” de un inmueble mediante celebración de boleto de compraventa con otorgamiento de posesión, antes del 1.1.2018, la futura enajenación del bien quedará sometida al ITI.

En cuanto a obras iniciadas hasta el 31.12.2017, la prudencia indica considerarlas fuera del ámbito del impuesto cedular, por haber sido concebidas en un contexto tributario que no permitía contemplar el efecto del nuevo impuesto cedular.

## **III. NUEVAS FIGURAS: ENAJENACION INDIRECTA DE BIENES Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTE**

Se dedicará el presente apartado al análisis de dos nuevas regulaciones introducidas en el texto de la ley del impuesto a las ganancias por la reforma.

### **III.1 Enajenación indirecta de bienes**

La incorporación de la figura del título se enmarca en una tendencia internacional con diferentes alcances en cuanto a bienes subyacentes comprendidos, como destaca Mastandrea.

La figura es regulada por medio del nuevo artículo sin número incorporado a continuación del 13. Por su novedad nos permitimos transcribirlo aquí:

“ARTÍCULO ...- Enajenación indirecta de bienes situados en el territorio nacional. Se consideran ganancias de fuente argentina las obtenidas por sujetos no residentes en el país provenientes de la enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, Títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o cualquier otro derecho representativo del capital o patrimonio de una persona jurídica, fondo, fideicomiso o figura equivalente, establecimiento permanente, patrimonio de afectación o cualquier otra entidad, que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada en el exterior, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) El valor de mercado de las acciones, participaciones, cuotas, Títulos o derechos que dicho enajenante posee en la entidad constituida, domiciliada o ubicada en el exterior, al momento de la venta o en cualquiera de los doce (12) meses anteriores a la enajenación, provenga al menos en un treinta por ciento (30%) del valor de uno (1) o más de los siguientes bienes de los que sea propietaria en forma directa o por intermedio de otra u otras entidades:



(i) acciones, derechos, cuotas u otros Títulos de participación en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo, fideicomiso u otra entidad constituida en la República Argentina;

(ii) establecimientos permanentes en la República Argentina pertenecientes a una persona o entidad no residente en el país; u

(iii) otros bienes de cualquier naturaleza situados en la República Argentina o derechos sobre ellos.

A los efectos de este inciso, los bienes del país deberán ser valuados conforme su valor corriente en plaza.

b) Las acciones, participaciones, cuotas, Títulos o derechos enajenados —por sí o conjuntamente con entidades sobre las que posea control o vinculación, con el cónyuge, con el conviviente o con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente, descendente o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive- representen, al momento de la venta o en cualquiera de los doce (12) meses anteriores al de la enajenación, al menos el diez por ciento (10%) del patrimonio de la entidad del exterior que directa o indirectamente posee los bienes que se indican en el inciso precedente.

La ganancia de fuente argentina a la que hace mención el presente artículo es aquella determinada con arreglo a lo dispuesto en el segundo acápite del cuarto párrafo del cuarto artículo sin número agregado a continuación del artículo 90 pero únicamente en la proporción a la participación de los bienes en el país en el valor de las acciones enajenadas.

Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación cuando se demuestre fehacientemente que se trata de transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto económico y se cumplan los requisitos que a tal efecto determine la reglamentación.”

Reseña Mastandrea, en materia de regulaciones contenidas en convenios para evitar la doble imposición, que el modelo ONU contiene un esquema amplio de configuración de venta indirecta de acciones, mientras que el modelo OCDE se restringe a los casos de enajenación de participaciones cuyos activos involucrados estén constituidos, en más de un 50%, por bienes raíces.

Sabiamente señala Mastandrea:

“Sin perjuicio de la importancia y de la equidad que incorpora la figura, debemos advertir que una situación que la nueva presunción deberá superar es el flujo de información sobre la materialización de tales operaciones.”

### **III.1.1. Caracteres distintivos**

Para conceptualizar las situaciones que quedan comprendidas en la presunción, puede presentarse la siguiente síntesis:

-Sujeto enajenante: residentes en el exterior

-Objeto enajenado: acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o cualquier otro derecho representativo del capital o patrimonio de una persona jurídica, fondo, fideicomiso o figura equivalente, establecimiento permanente,

patrimonio de afectación o cualquier otra entidad, **que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada en el exterior**

-Valor de mercado integrado en la forma enunciada por la ley, **referido a bienes situados en nuestro país**

-Porcentajes de participación: no inferiores a los enunciados por la ley

-Excepto que se trate de transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto económico y se cumplan los requisitos que a tal efecto determine la reglamentación. La definición de conjunto económico para estos fines no debería diferir del adoptado en materia de reorganizaciones empresariales (art. 77 LIG).

### III.1.2. Aspectos por analizar y reglamentar

Una de las pautas que condiciona la aplicación del supuesto de venta indirecta es que el valor de mercado de las acciones, participaciones, cuotas, títulos o derechos que dicho enajenante posee en la entidad constituida, domiciliada o ubicada en el exterior, al momento de la venta o en cualquiera de los doce (12) meses anteriores a la enajenación, provenga al menos en un treinta por ciento (30%) del valor de uno (1) o más de determinados bienes, enumerados por la ley y situados en nuestro país, de los que sea propietaria en forma directa o por intermedio de otra u otras entidades.

Ello abre diferentes interrogantes analizados por Mastandrea, entre los cuales cabe mencionar:

- i) La forma de determinar valores de mercado para bienes sin cotización conocida, dada la existencia de multiplicidad de criterios técnicos para sustentar diferentes valuaciones.
- ii) Requisitos de homogeneidad de criterios de valuación aplicables para casos de empresas situadas en diferentes países.

Cabe destacar que la complejidad de la valuación se ve acrecentada por la “movilidad” del momento en el cual debe medirse, teniendo en consideración la regla antielusión de doce meses anteriores a la venta.

En cuanto al parámetro referido al porcentaje mínimo de participación requerido para la aplicación de la figura, Mastandrea recomienda establecer si el 10% debe medirse por enajenante o, por el contrario, por conjunto de enajenantes, cuando éstos últimos no fueran sujetos vinculados o estuvieran unidos por algún grado de parentesco. Al respecto, desde un punto de vista teórico tendría sentido fijar un parámetro de conjunto cuando el porcentaje adicionado resultara significativo (¿65% o más?).

En la misma línea, Mastandrea recomienda aclarar que el testeo de la medición de cualquiera de los dos porcentajes citados por la norma (10% ó 30%), en el lapso precedente de doce meses, no tiene como propósito realizar una sumatoria de operaciones previas, sino analizar el impacto de eventuales cambios patrimoniales que pudieran afectar el porcentaje que arrojen.

Finalmente, en lo que refiere a sujetos obligados al pago del impuesto que, por aplicación de las normas contenidas en el cuarto artículo incorporado a continuación del 90 de la LIG, se determine respecto de las ventas indirectas que nos ocupan, se establece que:

*“En los supuestos, incluido el caso comprendido en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 13 de esta ley, en que el sujeto adquirente no sea residente en el país, el impuesto deberá ser ingresado por el beneficiario del exterior a través de su representante legal domiciliado en el país”.*

Al respecto resultarían de aplicación las disposiciones de la RG N° 4227 de la AFIP, la que como señala Mastandrea aclara, adicionalmente a lo establecido por la ley, que cuando el beneficiario del exterior no posea un representante en el país, dicho ingreso lo efectuará el propio beneficiario, mediante transferencia bancaria internacional.

### **III.2. Incorporación de la definición de establecimiento permanente**

Por primera vez la ley del impuesto a las ganancias define el concepto de establecimiento permanente perteneciente a un sujeto del exterior (en adelante, indistintamente "EP"), vagamente referido desde antes de ahora en el inciso b) del art. 69 LIG y definido para los residentes en el país en su versión situada en el exterior (art. 128 LIG).

La importancia práctica de tal concepto puede sintetizarse en dos aspectos:

i) La atribución del tratamiento como residente en nuestro país, lo que implica el reconocimiento como "contribuyente directo" del tributo, en lugar del sometimiento al régimen de sustitución en cabeza del pagador/agente de retención.

ii) La atribución de potestad tributaria a nuestro país en el marco de los convenios para evitar la doble imposición.

#### **III.2.1. La definición adoptada**

Una vez más la novedad de la norma invita a su transcripción literal:

"ARTÍCULO ...- Establecimiento permanente. A los efectos de esta ley el término "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad.

Asimismo, el término "establecimiento permanente" comprende en especial:

- a) una sede de dirección o de administración;
- b) una sucursal;
- c) una oficina;
- d) una fábrica;
- e) un taller;
- f) una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar relacionado con la exploración, explotación o extracción de recursos naturales incluida la actividad pesquera.

El término "establecimiento permanente" también comprende:

- a) una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o actividades de supervisión relacionados con ellos, cuando dichas obras, proyectos o actividades se desarrollen en el territorio de la Nación durante un período superior a seis (6) meses.

Cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras empresas vinculadas las actividades mencionadas en el párrafo anterior, los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se adicionarán, en su caso, para el cómputo del plazo mencionado.

- b) la prestación de servicios por parte de un sujeto del exterior, incluidos los servicios de consultores, en forma directa o por intermedio de sus empleados o de personal contratado por la empresa para ese fin, pero solo en el caso de que tales actividades prosigan en el territorio de

la Nación durante un período o períodos que en total excedan de seis (6) meses, dentro de un período cualquiera de doce (12) meses.

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refieren los incisos a) y b) del tercer párrafo, las actividades realizadas por sujetos con los que exista algún tipo de vinculación en los términos del primer artículo sin número agregado a continuación del 15 de esta ley deberán ser consideradas en forma conjunta, siempre que las actividades de ambas empresas sean idénticas o similares.

El término “establecimiento permanente” no incluye las siguientes actividades en la medida en que posean carácter auxiliar o preparatorio:

- a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
- b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o exponerlas;
- c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
- d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;
- e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad con tal carácter;
- f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los apartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

No obstante las disposiciones de los párrafos precedentes, se considera que existe establecimiento permanente cuando un sujeto actúe en el territorio nacional por cuenta de una persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del exterior y dicho sujeto:

- a) posea y habitualmente ejerza poderes que lo faculten para concluir contratos en nombre de la referida persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del exterior, o desempeñe un rol de significación que lleve a la conclusión de dichos contratos;
- b) mantenga en el país un depósito de bienes o mercancías desde el cual regularmente entrega bienes o mercancías por cuenta del sujeto del exterior;
- c) asuma riesgos que correspondan al sujeto residente en el extranjero;
- d) actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del sujeto del exterior;
- e) ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a sus propias actividades; o
- f) perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades.

No se considerará que un sujeto tiene un establecimiento permanente por la mera realización de negocios en el país por medio de corredores, comisionistas o cualquier otro intermediario que goce de una situación independiente, siempre que éstos actúen en el curso habitual de sus propios negocios y en sus relaciones comerciales o financieras con la empresa, las condiciones no difieran de aquellas generalmente acordadas por agentes independientes. No obstante,

cuando un sujeto actúa total o principalmente por cuenta de una persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del exterior, o de varios de éstos vinculados entre sí, ese sujeto no se considerará un agente independiente en el sentido de este párrafo con respecto a esas empresas.”

Como se observa, el concepto “empresa” se encuentra implicado en la definición, sin que la ley se haya encargado de definir tan compleja noción.

Al analizar la figura del lugar fijo de negocios, Mastandrea enuncia las condiciones que deberían satisfacerse, simultáneamente, para configurar el concepto de EP:

- “a) la existencia de una instalación de negocios -elemento material y tangible-;
- b) su fijeza -vinculo geográfico entre la actividad desarrollada y el EP-;
- c) grado de permanencia -voluntad de utilizarlo en forma continuada y en el tiempo-.
- d) su idoneidad para producir rentas.”

### **III.2.2. Cuestiones por resolver**

Diferentes cuestiones se presentan para resolver en materia de aplicación práctica de la figura del establecimiento permanente y su definición.

#### **1) Operaciones simultáneas**

Así por ejemplo, nos encontramos con la posibilidad de que el sujeto titular del EP efectúe otras operaciones que generen ganancia gravada de fuente argentina y lo conviertan en sujeto pasible de retenciones con carácter de pago único y definitivo. Mastandrea, en línea con los lineamientos de la OCDE, se inclina por aceptar la calidad de contribuyente dual, en tanto la renta no sea atribuible al EP, solución que se comparte.

#### **2) Obras - Plazos**

Diversas cuestiones, analizadas por Mastandrea, se presentan con relación al plazo de seis meses establecido para las obras de construcción:

- La forma de cómputo de los plazos de inicio y de finalización, así como sus interrupciones
- La necesidad de fijar un término dentro del cual contar los seis meses, como ocurre en el caso de los servicios (quien esto escribe no lo considera necesario, dado que lo relevante es el plazo total de la obra)
- Los efectos prácticos de exceder finalmente el plazo previsto y quedar comprendido en la definición de EP
- Las razones por las que la ley sólo menciona la subcontratación, por parte del residente en el extranjero, con otras empresas vinculadas las actividades vinculadas con la obra, a fin de que los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se adicionen para el cómputo del plazo mencionado, y no menciona a subcontratistas no vinculados
- La delimitación de los casos comprendidos en la norma que Mastandrea califica como de “anti fragmentación” de las prestaciones entre compañías vinculadas.

#### **3) Actividades auxiliares o preparatorias**

Deberían precisarse los alcances de la exclusión para aquellas actividades que se consideren de naturaleza auxiliar o preparatoria.

#### **4) Intervención de agentes**

Requieren igualmente precisarse los alcances del concepto “rol de significación” atribuible a los agentes dependientes.

Con relación a los agentes considerados independientes y, por tanto, excluidos de la definición de EP, Mastandrea propone el análisis la “independencia real y efectiva”, en los siguientes términos:

“La existencia del agente independiente, requiere que haya independencia real y efectiva, lo cual existe cuando se verifica simultáneamente independencia jurídica, económica y funcional. La independencia en los TRES planos no sólo debe analizarse respecto de un sujeto del exterior, sino con relación a todas las empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo económico.

La independencia jurídica exige que estemos ante una persona física y/o jurídica distinta del no residente.

La independencia económica se verifica cuando el sujeto local trabaja como agente para varios clientes y ninguno de ellos posee importancia relativa con relación a otro. A su vez, tal independencia podrá observarse en función a los riesgos que asume el agente económico.

Por su parte, la independencia funcional exigirá que no existan instrucciones detalladas o control global del rol del agente económico; vale decir, el grado de libertad con la que se pueda ejercer el rol determinará el grado de independencia funcional”.

En esa línea de razonamiento, propone asimismo que la evaluación resulte flexible en el caso de la puesta en marcha del agente, considerando que la existencia de un único cliente no sería determinante en esas circunstancias.

#### **5) Situaciones no contempladas en la definición**

Mastandrea menciona las que se enuncian a continuación, así como la consecuente potencial ilegalidad de su regulación reglamentaria:

- Establecimiento permanente “digital”

- Actividad pesquera

- Seguros; con relación a éstos no han existido hasta el momento mayores controversias, atribuyéndose la actividad al lugar de residencia o constitución de la entidad jurídica en la cual recaen los efectos del contrato de seguros. Ello sin perjuicio de que el art. 11 LIG considera de fuente argentina los ingresos provenientes de operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en la Republica o que se refieran a personas que al tiempo de la celebración del contrato hubiesen residido en el país.

### **IV. RENTAS FINANCIERAS OBTENIDAS POR PERSONAS HUMANAS**

El del título constituye un apartado por demás relevante y complejo, dentro del análisis de la reforma, debido a diversas razones entre las que se destacan:

- los importantes cambios introducidos, incluyendo una intrincada telaraña de disposiciones y la derogación de la mayoría de las exenciones preexistentes;
- la incorporación de novedosas metodologías de imputación de la rentas, determinación de la ganancia, compensación de quebrantos y liquidación de impuestos cedulares;
- la proliferación de vehículos financieros en los que los sujetos invierten sus fondos.

La generalización de la imposición sobre este tipo de rentas es una cuestión sobre la que se viene debatiendo desde hace muchos años, sin que la balanza se hubiera inclinado claramente hacia algún lado. El tiempo dirá si el cambio introducido resulta finalmente positivo o no (con las

dificultades que tiene definir positivo para quién, el mercado, el Gobierno, los habitantes de la Nación).

Como se desprenderá del análisis de las nuevas disposiciones, la liquidación del impuesto se ha tornado altamente compleja, requiriendo de los contribuyentes (lo que equivale a afirmar, por extensión, de sus asesores tributarios) una extensa y tediosa tarea administrativa para disponer de la información necesaria (en casos de realización de múltiples operaciones).

De allí que sea dable esperar que la reglamentación admita simplificaciones para determinadas situaciones que así lo justifiquen.

No resulta fácil hacer una síntesis de las normas respectivas y mucho menos evitar aburrir al auditorio con reiteraciones de las mismas, pero debe igualmente intentarse.

#### **IV.1. Nuevo inciso 4) del artículo 2º. Derogación y adecuación de exenciones**

En primer lugar se amplía el objeto del impuesto con relación a las personas humanas y sucesiones indivisas (PH), considerando que son ganancias:

“4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.”

Cabe adelantar que la expresión “demás valores”, al igual que “monedas digitales”, requerirán de una definición reglamentaria con diversas cuestiones controvertidas, como lo expone Hugo N. Almoño y señalan Zabal-Bello en su trabajo.

La efectiva aplicación de la imposición regulada en el inciso glosado, como asimismo de aquellos rendimientos financieros típicamente comprendidos en el concepto de habitualidad potencial, pero que resultaban exentos por normas expresas para PH, no así para los sujetos empresa, requirió de la concomitante derogación de las exenciones contenidas en diferentes normas legales: Ley N° 23.576 de obligaciones negociables colocadas por oferta pública, Ley N° 24.441 en materia de colocación por la misma vía de certificaciones de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros, Ley de fondos comunes de inversión N° 24.083, y finalmente la propia ley del impuesto a las ganancias, al derogarse las exenciones para títulos públicos -inciso k) del artículo 20- y para colocaciones de fondos en entidades financieras (quedando ahora exentos solamente los intereses originados por depósitos en caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro). Ello sin perjuicio de la subsistencia de algunas de las exenciones para los beneficiarios del exterior, como se observará al comentar el inciso w) del art. 20.

El alcance amplio del objeto enunciado se restringe, no obstante, con la exención contenida en el nuevo inciso w) del artículo 20, la que presenta diferentes alcances según consideremos el caso de PH residentes o beneficiarios del exterior (BE), como asimismo de ciertos vehículos que canalizan programas de propiedad participada:

“w) Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, obtenidos por personas humanas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a sujetos comprendidos en los incisos d) y e) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley. La exención será también aplicable para



esos sujetos a las operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo 1 de ley 24.083 y sus modificaciones, en tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que determine la reglamentación, por dichos valores, siempre que cumplan las condiciones que se mencionan en el párrafo siguiente.

El beneficio previsto en el párrafo precedente sólo resultará de aplicación en la medida en que (a) se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores; y/o (b) las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas; y/o (c) sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

La exención a la que se refiere el primer párrafo de este inciso procederá también para las sociedades de inversión, fiduciarios y otros entes que posean el carácter de sujetos del impuesto o de la obligación tributaria, constituidos como producto de procesos de privatización, de conformidad con las previsiones del Capítulo II de la ley 23.696 y normas concordantes, en tanto se trate de operaciones con acciones originadas en programas de propiedad participada, implementadas en el marco del Capítulo III de la misma ley.

La exención prevista en este inciso también será de aplicación para los beneficiarios del exterior en la medida en que tales beneficiarios no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes. Asimismo, estarán exentos del impuesto los intereses o rendimientos y los resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta o disposición, de los siguientes valores obtenidos por los beneficiarios del exterior antes mencionados: (i) títulos públicos —títulos, bonos, letras y demás obligaciones emitidos por los Estados Nacional, Provinciales, Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—; (ii) obligaciones negociables a que se refiere el artículo 36 de la ley 23.576 y sus modificaciones, títulos de deuda de fideicomisos financieros constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, colocados por oferta pública, y cuotapartes de renta de fondos comunes de inversión constituidos en el país, comprendidos en el artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones, colocados por oferta pública; y (iii) valores representativos o certificados de depósitos de acciones emitidos en el exterior, cuando tales acciones fueran emitidas por entidades domiciliadas, establecidas o radicadas en la República Argentina y cuenten con autorización de oferta pública por la Comisión Nacional de Valores.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no resultará de aplicación cuando se trate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC).

La Comisión Nacional de Valores está facultada a reglamentar y fiscalizar, en el ámbito de su competencia, las condiciones establecidas en este artículo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.831.”.

Zabala-Bello y Almoño recuerdan que, entre las escasísimas exenciones subsistentes, se encuentran las surgidas de las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición celebrados por nuestro país con Bolivia y Brasil.

Para completar esta introducción cabe mencionar la controversia, más académica que de efectos prácticos (dado que los impuestos cedulares tienen sus propias reglas de imputación y determinación), respecto de si los nuevos hechos gravados están comprendidos en alguna categoría de ganancias (cuando generan rentas de fuente argentina), o si precisamente su cedularidad los excluye de las mismas. Sobre esta cuestión opinan los autores Zabala-Bello, así como Almoño. En el caso de los dividendos de sociedades locales, al menos, no parece haber

dudas de que están enunciados entre las ganancias de la segunda categoría, no obstante estar comprendidos en un impuesto cedular, como se verá más adelante. Asimismo, como se mencionara más arriba Fernández considera incluidas en las categorías primera y segunda los hechos impositivos comprendidos en el impuesto cedular. En igual sentido, la excepción que hace el art. 19 en materia de quebrantos, con relación a los impuestos cedulares al aludir a las rentas de las distintas categorías, llevaría a concluir que éstas los incluyen. En un plano estrictamente teórico no parecen existir impedimentos para que las rentas enunciadas en las distintas categorías sean, a continuación, encasilladas en el impuesto global o en los cedulares. El propio artículo 90.7 declara aplicables, supletoriamente, las normas del Título II (además del I, como ya se mencionara más arriba).

## **IV.2. Gravabilidad de los dividendos**

El cuadro general del nuevo tratamiento de las rentas financieras se completa con la sustitución del régimen de integración de la renta corporativa con la distribución de dividendos, modificación que por razones metodológicas es tratada en otro apartado de este informe.

## **IV.3. Definición de fuente**

Se incorporan precisiones con relación a la fuente de ciertas ganancias, por medio del nuevo art. 7° LIG, en el que se dispone:

-Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, las ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos Comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores, se considerarán íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina.

-Los valores representativos o certificados de depósito de acciones y de demás valores, se considerarán de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, constituido o radicado en la República Argentina, cualquiera fuera la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos o el de depósito de tales acciones y demás valores.

Si bien resultaría novedosa la inclusión de una norma expresa como la del segundo párrafo, su temperamento podía considerarse ya implícito en las pautas generales de fuente adoptadas por la ley desde antaño (caso de los CEDEARs, cuyas ganancias son de fuente extranjera y están no obstante exentos si las PH los comercializa en las formas contempladas en el inc. w) del art. 20 LIG, o de los ADRs cuyas ganancias son de fuente argentina y no gozan de la exención, no obstante estar referidos a empresas nacionales que cotizan, si se comercializan en el exterior por parte de sujetos residentes).

Al respecto Zabala-Bello destacan como una asimetría, la gravabilidad de las enajenaciones en el exterior de acciones argentinas que cotizan, en comparación con la exención para acciones extranjeras operadas en los mercados regulados locales.

## **IV.4. Impuestos cedulares**

A fin de dar tratamiento diferenciado del impuesto progresivo a las rentas aquí analizadas, se crean sendos impuestos cedulares, con alícuotas proporcionales específicas.

Ellos son aplicables a las **ganancias de fuente argentina**, obtenidas por las personas humanas y las sucesiones indivisas, así como a los beneficiarios del exterior (excepto que residan en jurisdicciones no cooperantes o que los fondos provengan de ellas), por los siguientes conceptos y artículos incorporados a continuación del 90 LIG:

1) 90.1. Rendimiento producto de la colocación de capital en valores, en concepto de intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la colocación de capital en los casos respectivos de valores a que se refiere el artículo 90.4, o de intereses originados en depósitos a plazo efectuados en instituciones sujetas al régimen de entidades financieras de la ley 21.526 y sus modificaciones, quedando alcanzados por el impuesto a la alícuota que se detalla a continuación dependiendo de la inversión de que se trate:

a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, Títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores, en moneda nacional sin cláusula de ajuste: cinco por ciento (5%).

El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar la alícuota dispuesta en el párrafo precedente de este inciso, no pudiendo exceder de la prevista en el inciso siguiente, siempre que medien informes técnicos fundados, basados en variables económicas, que así lo justifiquen.

b) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, Títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores, en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: quince por ciento (15%).

Cuando se trate de operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo 1° de la ley 24.083, integrado por inversiones comprendidas en el primer párrafo del presente artículo en distintas monedas, la reglamentación podrá establecer procedimientos que prevean la forma de aplicación de las tasas, en forma proporcional a los activos subyacentes respectivos.

En el caso de los beneficiarios del exterior, en la medida que la ganancia no se encuentre exenta de acuerdo a lo dispuesto en el cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20 (intereses de bonos), quedará alcanzada por las disposiciones contenidas en el artículo 93 (aplicación de ganancia neta presunta), a las alícuotas más arriba enunciadas.

2) 90.3. Dividendos y utilidades asimilables. Los dividendos y utilidades a que se refiere el artículo 46 y el primer artículo agregado a continuación de este último, tributarán a la alícuota del trece por ciento (13%), no resultando de aplicación para los sujetos que tributen las rentas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 69.

El impuesto a que hace referencia el párrafo precedente deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras de los referidos dividendos y utilidades. Dicha retención tendrá el carácter de pago único y definitivo para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la República Argentina que no estuvieran inscriptos en el impuesto. Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo se paguen a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago único y definitivo.

Cuando se tratara de los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones, la reglamentación podrá establecer regímenes

de retención de la alícuota a que se refiere el primer párrafo, sobre los dividendos y utilidades allí mencionados, que distribuyan a sus inversores en caso de rescate y/o pago o distribución de utilidades.

3) 90.4. Operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores, cuyas ganancias quedarán alcanzadas por el impuesto a la alícuota que se detalla a continuación dependiendo del valor de que se trate:

a) Títulos públicos, obligaciones negociables, Títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, así como cualquier otra clase de Título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional sin cláusula de ajuste: cinco por ciento (5%).

El Poder Ejecutivo nacional podrá incrementar la alícuota dispuesta en el párrafo precedente, no pudiendo exceder de la prevista en el inciso siguiente, siempre que medien informes técnicos fundados, basados en variables económicas, que así lo justifiquen.

b) Títulos públicos, obligaciones negociables, Títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, monedas digitales, así como cualquier otra clase de Título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: quince por ciento (15%).

c) Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones, que (i) cotizan en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores que no cumplen los requisitos a que hace referencia el inciso w) del artículo 20 de esta ley, o que (ii) no cotizan en las referidas bolsas o mercados de valores: quince por ciento (15%). **Sería el caso, por ejemplo, de acciones que cotizan pero se enajenan fuera de la rueda del mercado.**

Cuando se trate de cuotapartes de fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la ley 24.083 y/o de certificados de participación de los fideicomisos financieros, cuyo activo subyacente principal esté constituido por: (i) acciones y/o valores representativos o certificados de participación en acciones y demás valores, que cumplen las condiciones a que alude el inciso w) del artículo 20 de la ley, así como (ii) valores a que se refiere el cuarto párrafo de ese inciso, la ganancia por rescate derivada de aquéllos tendrá el tratamiento correspondiente a dicho activo subyacente (actualmente exentos, en el segundo caso solamente para beneficiarios del exterior).

A este respecto la reglamentación debería aclarar si la exención resulta plena o proporcional, así como el tratamiento de los períodos en que no se cumpliera la pauta de activo principal, aspectos tratados por Zabala-Bello y Almoño.

Cuando se trate de operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo 1 de la ley 24.083 y/o de certificados de participación de fideicomisos financieros, integrado por valores comprendidos en el primer párrafo del presente artículo en distintas monedas, la reglamentación podrá establecer procedimientos que prevean la forma de aplicación de las alícuotas a que se refieren los incisos del primer párrafo, en forma proporcional

a los activos subyacentes respectivos, así como la aplicación de exenciones en los casos que tales activos principales sean los comprendidos en el cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20 de esta ley.

Con respecto a la diferenciación de tasas de imposición según la moneda en que se efectuara la inversión, una cita de Zabala-Bello señala que “Atento a la complejidad del cálculo del impuesto a la renta financiera en términos reales, es decir, renta nominal neta de la inflación, se ha recurrido al cálculo de dicho gravamen en base a la renta nominal, lo que lleva a una doble tributación, ya que se tributa sobre la renta financiera y sobre la inflación.”

La facultad de elevar las tasas del 5% hasta el 15%, que la ley otorgara al Poder Ejecutivo, resulta criticable en términos del principio de legalidad; es de esperar que, de utilizarse la potestad, sea siempre dispuesta para las operaciones futuras.

Zabala-Bello analizan el posible encuadre de los derivados como “demás valores”, concluyendo que los resultados de contratos de instrumentos derivados no gozan del beneficio exentivo, en los términos del art. 20, inciso w), a pesar de que los mismos se negocien en el mercado de valores (ROFEX), debido a que no encuadran en el mencionado concepto de “demás valores” que prescribe la norma citada.

Para finalizar con este apartado, cabe hacer mención a la posible interpretación de que el impuesto cedular a la compraventa de valores resultaría aplicable incluso al “habitualista”, interpretación que se enmarca en la línea general (que no se comparte) de dar preeminencia a los incisos específicos del art. 2º LIG por sobre los generales, y a la cual la aclaración contenida en el art. 52 LIG, a que se hará mención en el apartado IV.6. y referida a que no resultan de aplicación las disposiciones sobre valuación de bienes de cambio, otorgaría un argumento adicional.

#### **IV.5. Imputación y determinación de las ganancias**

Se tratan en forma conjunta ambas cuestiones porque, en materia de intereses y rendimientos similares, en algunos casos las nuevas normas combinan ambas regulaciones.

1) Los “criterios generales” de imputación aplicables surgen de diferentes párrafos del art. 18 LIG, a saber:

1.1) Los dividendos de acciones o utilidades distribuidas por los sujetos del artículo 69 y los intereses o rendimientos de Títulos, bonos, cuotapartes de fondos comunes de inversión y demás valores se imputarán en el ejercicio en que hayan sido: (i) puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero; o (ii) capitalizados, siempre que los valores prevean pagos de intereses o rendimientos en plazos de hasta un año.

Respecto de valores que prevean plazos de pago superiores a un año, la imputación se realizará de acuerdo con su devengamiento en función del tiempo.

En el caso de emisión o adquisición de tales valores a precios por debajo o por encima del valor nominal residual, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, las diferencias de precio se imputarán conforme los procedimientos contemplados en los incisos c) y d) del artículo 90.2., al que se hará referencia más abajo, dentro del apartado de criterios especiales de imputación.

1.2) Las ganancias a que se refieren los artículos 90.1. (intereses) y 90.4. (enajenaciones) se

imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas. Almoño, en criterio que se comparte, aclara que respecto de los intereses tiene preeminencia lo expresado en 1.1.) anterior. Cuando las operaciones sean pagaderas en cuotas con vencimiento en más de un año fiscal, las ganancias se imputarán en cada año en la proporción de las cuotas percibidas en éste.

2) **Los criterios especiales de imputación** son los surgidos de las normas especiales a las que remite el art. 18, normas éstas que, junto con las restantes que se citarán, además se emplean para regular la determinación de la ganancia, como se verá seguidamente:

2.1) 90.2.a) Si el valor se suscribe o adquiere al precio nominal residual, el interés que se devengue se imputará al año fiscal en que se verifique el pago, la fecha de puesta a disposición o su capitalización, lo que ocurra primero, siempre que dicho valor prevea pagos de interés en plazos de hasta un año. Respecto de plazos de pago superiores a un año, el interés se imputará de acuerdo a su devengamiento en función del tiempo. En caso de enajenación del valor, se considerará el precio de suscripción o adquisición como su costo computable. Si al momento de la enajenación existieran intereses devengados desde la fecha de pago de la última cuota de interés (intereses corridos) que no se hubieren gravado a ese momento, esos intereses, a opción del contribuyente, podrán discriminarse del precio de enajenación (a priori solamente conveniente si existieran quebrantos específicos a compensar, constituidos por pérdidas derivadas de compras por encima de paridad técnica).

2.2) 90.2.b) Si se adquiere un valor, sea que cotice o no en bolsas o mercados, que contenga intereses corridos desde la emisión o desde la fecha del pago de la última cuota de interés, el contribuyente podrá optar entre (i) considerar el precio de adquisición como costo computable del valor adquirido, o (ii) discriminar del precio de adquisición el interés corrido. De optar por la segunda alternativa, en la medida en que los intereses se paguen, se pongan a disposición o se capitalicen, lo que ocurra antes, el interés sujeto a impuesto será la diferencia entre el importe puesto a disposición o capitalizado y la parte del precio de adquisición atribuible al interés corrido a la fecha de adquisición.

2.3) 90.2.c) Si se suscribe o adquiere un valor que hubiera sido **emitido bajo la par**, pagando un precio neto de intereses corridos, menor al nominal residual, el descuento recibirá el tratamiento aplicable a los intereses, debiendo imputarse en función a su devengamiento en cada año fiscal, a partir del mes de suscripción o adquisición hasta el mes en que se produzca la amortización parcial y/o total o hasta su enajenación, lo que ocurra con anterioridad. La reglamentación establecerá los casos en donde ese procedimiento no resulte aplicable, así como el mecanismo de imputación en caso de amortizaciones parciales. Con respecto a los intereses que devengue el valor es aplicable lo dispuesto en el inciso a) precedente. A efectos de la determinación del resultado por enajenación, al precio de suscripción o adquisición se le sumará el descuento que se hubiera gravado cada año entre la fecha de suscripción o adquisición y la de enajenación.

Curiosamente la ley refiere exclusivamente al caso en que el valor hubiera sido emitido bajo la par, siendo que lo relevante a los fines expuestos sería la adquisición por debajo del valor técnico (dejando así el interrogante de cómo tratar estos últimos casos para valores emitidos a la par, aunque va de suyo que el tratamiento no podría ser diferente, ya que la característica distintiva es el pago de un precio menor al nominal residual).

2.4) 90.2.d) Si se suscribe o adquiere un valor pagando un precio neto de intereses corridos, superior al nominal residual, a los fines de determinar la porción gravable de los intereses pagados, puestos a disposición o capitalizados, el contribuyente podrá optar por deducir esa diferencia en función a su devengamiento en cada año fiscal, a partir del mes de suscripción o



adquisición hasta el mes en que se produzca la amortización parcial y/o total o hasta su enajenación, lo que ocurra con anterioridad.

La reglamentación establecerá el mecanismo de imputación en caso de amortizaciones parciales. Con respecto a los intereses que devengue el valor es aplicable lo dispuesto en el inciso a) precedente. A efectos de la determinación del resultado por enajenación, al costo de suscripción o adquisición se le restará, en su caso, el costo a que se refiere la primera parte del presente inciso d) que se hubiera deducido cada año entre la fecha de suscripción o adquisición y la de enajenación.

Parecería ser casi obligado el uso de esta opción, debido a que de no ejercerse existirá alta probabilidad de que la enajenación arroje quebranto, quedando gravado el interés "bruto".

*-Reglas comunes:*

Las opciones a que se refieren los incisos b), c) y d) precedentes, deberán ser ejercidas sobre la totalidad de las inversiones respectivas y mantenerse durante cinco (5) años.

La imputación de acuerdo a su devengamiento en función del tiempo a que se refiere el inciso a) del primer párrafo del presente artículo, así como el devengamiento en forma proporcional que mencionan sus incisos c) y d), implican que, en los casos de valores en moneda extranjera la conversión a pesos de los respectivos conceptos se hará al tipo de cambio comprador conforme al último valor de cotización del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año. Tratándose de valores con cláusula de ajuste, tales conceptos se calcularán sobre el valor del capital actualizado a esa fecha.

Almoño ilustra sobre la aplicación de los casos mencionados.

3) La aplicación de criterios de devengamiento, en los casos de rendimientos en moneda extranjera, dan lugar a la aplicación de tipos de cambio al cierre del año de devengamiento (sea del ingreso o de la deducción), como señala Almoño, cabiendo preguntarse si a su respecto resulta de aplicación principio general de "revaluación anual" de saldos impagos o si, por el contrario, la diferencia con importe percibido finalmente se gravará íntegramente en tal oportunidad.

4) En cuanto a la determinación de la ganancia por enajenación de valores y demás conceptos alcanzados, cabe apuntar que la ganancia bruta por la enajenación se determinará con base en las siguientes pautas:

(i) En los casos de:

a) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, así como cualquier otra clase de Título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional sin cláusula de ajuste

b) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, monedas digitales, así como cualquier otra clase de Título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera,

deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición. De tratarse de valores en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, las actualizaciones y diferencias de cambio no serán consideradas como integrantes de la ganancia bruta.



(ii) En el caso de los valores comprendidos en el inciso c) del primer párrafo del artículo 90.4 ("c) Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones, que (i) cotizan en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores que no cumplen los requisitos a que hace referencia el inciso w) del artículo 20 de esta ley, o que (ii) no cotizan en las referidas bolsas o mercados de valores"), deduciendo del precio de transferencia el **costo de adquisición actualizado, mediante la aplicación del índice mencionado en el segundo párrafo del artículo 89**, desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia. Tratándose de acciones liberadas se tomará como costo de adquisición aquél al que se refiere el cuarto párrafo del artículo 46 (**es decir costo cero, dado que el dividendo no resultó gravado**). A tales fines se considerará, sin admitir prueba en contrario, que los valores enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad.

#### IV.6. Casos especiales (transición, antielusión, seguros con ahorro)

Sendos incisos del art. 86 de la ley de reforma contienen disposiciones atinentes a la transición entre las viejas y nuevas reglas.

La primera -inc. f)- apunta a que el costo computable de los valores cuyas ventas quedan gravadas sea su valor de cotización al 31.12.2017 o el costo de adquisición, el que resulte mayor, mientras que en el caso de certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión cerrados, la gravabilidad de la enajenación se aplicará -en la medida que las ganancias por su enajenación hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.430-, sólo para las adquisiciones de tales valores producidas a partir de su vigencia.

Zabala-Bello y Almoño destacan algunas situaciones que contempladas por la reglamentación, como son:

- Tratamiento de la financiación por entrega diferida
- Medidas anti-elusión, para casos de enajenaciones que generan quebrantos, sucedidas por recompras o bien para evitar la gravabilidad de los ADRs, mediante su conversión por acciones argentinas que coticen en bolsas o mercados regulados por la CNV, para luego vender dichas acciones gozando del beneficio de la exención; **en este último caso, la gravabilidad de la aludida conversión implica gravar el traslado del bien de un lugar a otro.**

Si bien referido a las ganancias de la tercera categoría, cabe mencionar un detalle, advertido por Zabala-Bello, en el sentido de que la modificación del art. 52 LIG aclara que no se valuarán como bienes de cambio las acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores y, en consecuencia, se registrarán por las normas específicas que dispone la ley para dichos bienes.

Finalmente merecen destacarse las distorsiones que, según señala Almoño, subsisten en la ley con relación al tratamiento de los seguros de vida con capitalización (mixtos), cuyos rendimientos se encuentran exentos si se perciben al vencimiento de sus plazos, como asimismo en comparación con los seguros de retiro, que no gozan de tal exención y asimismo sufren

diferente imposición que los fondos comunes de inversión que tengan por objeto planes de retiro.

#### **IV.7. Deducciones para la determinación de la ganancia cedular**

Los dos últimos artículos anteriores al 91 LIG completan la regulación sobre la determinación de la ganancia sometida a los impuestos cedulares.

Así, en materia de deducción especial, cuando las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, obtengan las ganancias a que se refieren el primer artículo agregado sin número a continuación del artículo 90 y los incisos a) y b) del primer párrafo del cuarto artículo agregado sin número a continuación del artículo 90, en tanto se trate de ganancias de fuente argentina, podrá efectuarse una deducción especial por un monto equivalente a la suma a la que alude el inciso a) del artículo 23, por período fiscal y que se proporcionará de acuerdo a la renta atribuible a cada uno de esos conceptos.

El cómputo del importe a que hace referencia el párrafo precedente no podrá dar lugar a quebranto y tampoco podrá considerarse en períodos fiscales posteriores, de existir, el remanente no utilizado.

Adicionalmente sólo podrán computarse contra las ganancias mencionadas en el Capítulo de impuestos cedulares, los costos de adquisición y gastos directa o indirectamente relacionados con ellas, no pudiendo deducirse los conceptos previstos en los artículos 22, 23 y 81 de la ley y todos aquellos que no correspondan a una determinada categoría de ganancias.

Sin perjuicio de ello, a efectos de la determinación de las ganancias a que se refiere el citado Capítulo II, en todo aquello no específicamente regulado por éste, se aplicarán supletoriamente, las disposiciones de los Títulos I y II de la ley. Es de destacar que no se menciona el Título III, referido a las deducciones.

Señala Almoño: “La imposibilidad de computar las deducciones generales del art. 81 de la LIG impide, en el caso de existencia de deudas cuyos fondos se hubieran invertido en valores que generen las ganancias sujetas al impuesto cedular, la deducción de los intereses que se paguen.” Ciertamente tal efecto carece de lógica económica y conspira contra el desenvolvimiento de los negocios.

Otras deducciones controversiales, sobre las que ilustra Almoño, son:

- el impuesto sobre los bienes personales que recaiga sobre los activos generadores de renta
- el prorrateo de gastos directos e indirectos
- el orden de imputación de quebrantos anteriores y deducción especial.

#### **IV.8. Quebrantos**

La nueva redacción del art. 19 LIG contempla, como excepción a la regla general de compensar los resultados netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre las distintas categorías, que tal compensación no tendrá lugar con las ganancias provenientes de las inversiones y operaciones a las que hace referencia el Capítulo II del Título IV de la LIG, referido al impuesto cedular.

Los quebrantos generados por ese tipo de inversiones y operaciones resultarán de naturaleza específica debiendo, por lo tanto, compensarse exclusivamente con ganancias futuras de su misma fuente y clase.

Se entiende por “clase”, al conjunto de ganancias comprendidas en cada uno de los artículos del citado Capítulo II, lo que implica que las pérdidas y ganancias generadas por intereses o rendimientos similares (art. 90.1 de la LIG) se compensarán sólo entre sí; del mismo modo con las generadas por operaciones de enajenación (art. 90.4 de la LIG); no pudiendo compensarse las primeras con las segundas y viceversa.

En materia de renta de fuente extranjera cabe hacer mención del nuevo art. 135 LIG, el cual establece:

-Los quebrantos derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales — incluyendo fondos comunes de inversión o entidades con otra denominación que cumplan iguales funciones y fideicomisos o contratos similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que los experimente, serán considerados de naturaleza específica y sólo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones, en los ejercicios o años fiscales que se experimentaron las pérdidas o en los cinco (5) años inmediatos siguientes, **computados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.**

-Los quebrantos de fuente argentina originados por rentas provenientes de las inversiones — incluidas las monedas digitales— y operaciones a que hace referencia el Capítulo II del Título IV de la ley (impuesto cedular), no podrán imputarse contra ganancias netas de fuente extranjera provenientes de la enajenación del mismo tipo de inversiones y operaciones ni ser objeto de la deducción prevista en el tercer párrafo del artículo 134.

## V. TRATAMIENTO DE LA RENTA CORPORATIVA

Como recuerda Rubén Malvitano, este capítulo de la imposición a la renta ha sido motivo de constante análisis y debate doctrinario a lo largo de los últimos cincuenta años, ya que por cierto resulta de particular interés para el analista, debido a que presenta el desafío de abordar las cuestiones involucradas desde una doble óptica, es decir desde el impacto sufrido por el obligado directo, esto es la sociedad o ente generador de la renta, como así también por el socio o accionista, indirectamente incidido.

El nuevo esquema, que combina una tasa societaria proporcional que va paulatinamente reduciéndose, con una retención complementaria sobre dividendos, que completa (en números redondos) la misma tasa de imposición vigente con anterioridad a la reforma (35%), se brinda un incentivo a la reinversión de utilidades por parte de los entes comprendidos en el art. 69 LIG. De tal suerte, una parte de esa reinversión es financiada por el Estado, que posterga su pretensión recaudatoria sobre la ganancia en cuestión.

Es preciso aclarar, respecto de la generalización empleada más arriba, en cuanto a “completar la misma tasa de imposición vigente con anterioridad a la reforma”, que ello no será así en caso de ganancias exentas del impuesto en cabeza de la sociedad, ya que respecto de las mismas la tasa de imposición efectiva aumentará, como producto de la aplicación de la retención sobre los dividendos. Esta circunstancia no afecta, obviamente, a la cadena de dividendos por participaciones locales sucesivas, debido a que ellos no resultan computables a los fines de la

retención (excepto, desde luego, en la etapa final de percepción por una PH o beneficiario del exterior).

Tras reiterar la crítica al sistema vigente por no considerar la situación personal del contribuyente, el que en todos los casos y prescindiendo de su situación familiar, su nivel de ingresos, entre otros, ve afectado el rendimiento de su inversión con la misma tasa proporcional, Malvitano sostiene asimismo que: “Sin desconocer las cuestiones de equidad que podrían argumentarse en contra, pensamos que –en aras de alcanzar objetivos de eficiencia económica impulsando la inversión empresarial-, hubiese sido conveniente conceder un tratamiento más ventajoso por vía de una imposición final menor a la marginal máxima prevista en la escala del art. 90 LIG”.

Por otro lado, Malvitano resalta que “el esquema legal vigente plantea una falta de alineamiento entre el tratamiento previsto para el resultado por compraventa de acciones (participaciones), con el contemplado para dividendos (utilidades).

Así, mientras el primero es sometido a un impuesto cedular del orden del 15 % los segundos terminan alcanzados por las tasas del 7 % o 13 %, según el ejercicio fiscal de origen. Ello afecta la neutralidad del gravamen, atento al impulso que supone a decidir la distribución de la renta societaria en fecha inmediatamente anterior a una eventual enajenación de los valores.”

Por cierto que este tipo de asimetrías no es nuevo en la ley, aunque se ha acentuado con la reforma.

Al analizar la nueva tasa de impuesto “corporativa”, Malvitano hace referencia a un supuesto descalce entre la misma y la aplicable en casos particulares como son las salidas no documentadas y los beneficiarios del exterior. El supuesto descalce no sería tal, en tanto se conciba la reducción de la tasa corporativa como un mero desdoblamiento en el ingreso del impuesto; en igual sentido, nótese que al verificarse la salida no documentada, no existirá distribución de dividendos por una cuantía equiparable (sea en el propio ente o en el perceptor de esa salida), por lo que tampoco se verificará la retención del tributo, lo que justifica la aplicación de la tasa “plena”.

### **V.1. Tratamiento de los dividendos**

Como se recordará, los dividendos ya se encontraban comprendidos en el inciso i) del art. 45 LIG, enunciativo de la rentas de la segunda categoría. Ahora bien, mediante la modificación del art. 46 LIG, han dejado de ser no computables para pasar a ser ganancia gravada para las PH, excepto en el caso de las distribuciones en acciones liberadas provenientes de revalúos o ajustes contables y de la capitalización de utilidades líquidas y realizadas, los que nos serán computables por los beneficiarios a los fines de de la determinación de su ganancia gravada ni para el cálculo del prorrateo de gastos.

Con una cuestionable metodología normativa (no solamente por su ubicación sino, además, por la redacción, que a los fines de este informe ha sido convertida según interpretación libre), por medio del artículo 90.3 LIG (que instaura el impuesto cedular aplicable a las rentas que nos ocupan) se dispone que resultan no computables los dividendos conformados por rentas sujetas a la tasa del 41,5% (explotación de juegos de azar en casinos y apuestas), lo que resulta razonable en tanto dicha alícuota no fue reducida por la ley de reforma.

Como no podría ser de otro modo, los dividendos en especie se computarán a su valor corriente en plaza a la fecha de su puesta a disposición (generando el correlativo resultado gravado en cabeza del ente que los distribuye).

El sometimiento de los dividendos (expresión que, a los fines de este informe, abarca todo tipo de utilidad societaria cuyo tratamiento resulta asimilable a los dividendos, por provenir de entes comprendidos en el art. 69 LIG) a la retención de impuesto a las ganancias, con independencia de “los fondos” con los cuales se abonen aquellos, y la insistencia en considerar la distribución de primas de emisión como ganancias exentas para la sociedad y dividendos para los socios, reaviva la discusión sobre la calificación que dichos aportes efectuados por los socios (bajo el rótulo de “primas de emisión”) debería tener.

En diferentes obras, en coautoría con Lorenzo, Bechara, Calcagno y Edelstein, hemos manifestado nuestra visión en cuanto a que el aportante de la prima no puede considerar su recupero como dividendo.

Subsiste asimismo el tratamiento de los dividendos como no computables para los sujetos de la tercera categoría, manteniéndose así la incertidumbre (creada por la actitud reticente de la Autoridad Fiscal) respecto de la deducción de gastos necesarios, conforme lo admite el segundo párrafo del art. 64 LIG.

Curiosamente y a pesar de que el art. 46 (aplicable en el caso de dividendos de la segunda categoría) no incluye una regulación similar al 64 LIG, en materia de deducción de gastos, como se verá seguidamente se otorga a la retención sobre los dividendos la condición de pago a cuenta del impuesto que correspondiera, lo que hace pensar en la posibilidad de deducir erogaciones relacionadas con la obtención de la renta, como desarrollará Malvitano en su exposición.

#### **V.1.1. Impuesto cedular para los dividendos**

Por medio del art. 90.3. se crea otro impuesto cedular para los dividendos y utilidades asimilables.

Es así que la ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que se refiere el artículo 46 y el primer artículo agregado a continuación de este último, tributará a la alícuota del trece por ciento (13%) –salvo los dos primeros años, en los que se aplicará la del 7%- , no resultando de aplicación para los sujetos que tributen las rentas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 69 como ya se adelantara. Esta exclusión requeriría una regla para establecer el orden de imputación, en caso de que las normas regulatorias admitieran que tales entes desarrollaran simultáneamente actividades sujetas a la tasa general de imposición. Como advierten Zabala-Bello, una similar presunción de distribución también deberá ser adoptada por la entidad pagadora de los dividendos o utilidades respecto del dividendo o utilidad correspondiente a las ganancias obtenidas como consecuencia de su participación en el capital social o equivalente de sociedades que hubieran obtenido utilidades comprendidas en el segundo párrafo del art. 69 de la LIG.

El impuesto a que hace referencia el párrafo precedente deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras de los referidos dividendos y utilidades. Dicha retención tendrá el carácter de pago único y definitivo para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la República Argentina **que no estuvieran inscriptos en el impuesto.**

Cuando se tratara de los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones, la reglamentación podrá establecer regímenes

de retención de la alícuota a que se refiere el primer párrafo, sobre los dividendos y utilidades allí mencionados, que distribuyan a sus inversores en caso de rescate y/o pago o distribución de utilidades.

**Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo se paguen a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago único y definitivo.**

Como ilustrará la exposición de Malvitano, es importante destacar la necesidad de considerar las limitaciones en la tasa de retención que establezcan los convenios para evitar la doble imposición que hubiera celebrado nuestro país, para el supuesto de socios residentes en los terceros países signatarios.

Asimismo es de relevancia la circunstancia de que la ley no haya contemplado la imposibilidad de retener (verificable en los pagos en especie y en algunas presunciones de dividendos fictos, temática abordada más abajo), debilitando la posibilidad de que la solución venga dada por la reglamentación en términos de obligar al pagador y no al beneficiario de la renta.

#### **V.1.2. Tratamiento de los rescates**

La regulación del tratamiento de los rescates de acciones de compañías locales que incorpora la reforma, en línea con lo que ya establecían la ley en materia de fuente extranjera y el reglamento, merece las siguientes consideraciones:

- a) Si el dividendo de rescate resultara “negativo”, ello sería en principio consecuencia de quebrantos sufridos por la sociedad; luego, si se admitiera expresamente su consideración como pérdida de capital en cabeza del accionista (cosa que la ley no hace), se estaría admitiendo la traslación del quebranto de la sociedad de capital a sus socios, lo que no ha sido generalmente admitido.
- b) En los casos de accionistas que compraron su tenencia a terceros (no resultando, en consecuencia, suscriptores originales), el resultado por enajenación tiene un tratamiento diferenciado del dividendo, lo que justifica que la norma no contemple la compensación de ambos resultados entre sí.

#### **V.1.3. Dividendos fictos**

Señala Malvitano, al referirse al art. 46.1 LIG, que “La ley presume que, de darse las circunstancias que detalla, se configura la puesta a disposición del beneficio en los términos del art. 18 LIG; es decir que, en tanto aquellas se concreten en los hechos, se generará automáticamente la obligación de retener el impuesto por parte de la compañía.”

Coincidimos plenamente en avizorar un horizonte de alta conflictividad (potenciada por su interacción con la figura de la disposición de fondos a favor de terceros del art. 73 LIG) en la aplicación de la norma, más allá de que sus intenciones antielusión son claras y justificadas.

En la aludida conflictividad se enmarcan (a mero título de ejemplo):

- i) la discusión acerca de si tales presunciones admiten o no prueba en contrario; en rigor, la prueba en contrario podría responder a dos enfoques diferentes: a) la verificación de condiciones para la operación que la tornan en interés de la empresa (lo que implica sacar a la operación del encuadre como dividendo ficto “por falta de mérito”); y b) que conforme la

realidad económica no ha mediado la intención de distribuir dividendos, no obstante que las circunstancias de hecho permiten encuadrarlo en algunos de los supuestos de dividendo ficto; ii) el caso en el cual se devolvieran los fondos luego de haber ingresado la retención del impuesto; en este supuesto, el dividendo real (en términos económicos) estaría constituido por el interés o como quiera denominarse la retribución del capital dispuesto temporariamente, por lo que cabría repetir la retención practicada sobre el excedente.

En el caso de la presunción referida a ventas o compras al socio, por debajo o por encima, respectivamente, del valor de mercado de los bienes, resulta necesaria una armonización con el tratamiento de los resultados derivados de la propia venta, los que deberían determinarse precisamente en base al referido valor de mercado.

Cabe resaltar que la presunción de distribución de dividendos resulta de aplicación asimismo para las rentas de fuente extranjera.

**En mi opinión, no existen dudas de que la posterior aprobación formal de dividendos conformados con los fondos previamente dispuestos no constituye una ganancia gravada, cualquiera fuera el beneficiario formal de los primeros.**

#### **V.1.2. Vigencia ultra-activa del impuesto de igualación**

La doctrina en general ha criticado la subsistencia del impuesto de igualación –art. 69.1 LIG-, bien que con efectos residuales que irán agotándose con el devenir de los tiempos.

Las críticas en tal sentido parecen dar preeminencia a los efectos prácticos de tal subsistencia, más que a la equidad, principio éste que -en opinión de quien esto escribe- justifica dicha subsistencia.

Ahora bien, la subsistencia del impuesto de igualación acotado a una fecha concreta de devengamiento de utilidades contables, introduce un elemento hasta ahora inexistente en el intrincado análisis del impuesto de igualación, particularmente verificándose la existencia de diferencias temporarias entre la determinación de la ganancia contable y la impositiva.

Explicándonos, la continuidad temporal que, antes de la reforma, exhibía el impuesto de igualación, permitía en forma “natural” postergar la distribución de utilidades contables a la espera de que, en su caso, dieran lugar a la aparición de ganancias impositivas sometidas al impuesto, de modo de hacer converger ambos resultados y evitar un excedente sometido a retención del impuesto de igualación.

Con la reforma, la fecha de comparación parecería no ser otra que la de cierre del último ejercicio no comprendido en la reforma (por ej. 31.12.2017, 31.03.2018, etc.), en virtud de la presunción de distribución en primer término de las ganancias correspondientes a los períodos fiscales más antiguos.

No obstante, la conclusión no puede ser la del párrafo anterior, ya que ello conllevaría una injustificada doble imposición. De allí que sea dable esperar que la reglamentación contemple los mecanismos para incrementar el tope impositivo aplicable al impuesto de igualación, considerando aquellos movimientos producidos con posterioridad a la reforma, que tengan vinculación con el resultado contable sometido al impuesto de igualación (por ej., dividendos cobrados con posterioridad pero originados en utilidades devengadas en ejercicios sometidos a impuesto de igualación).



Nótese que el problema se extiende a otras diferencias distintas de las temporarias, como por ejemplo la reexpresión de ganancias acumuladas por inflación (frente a la falta de aplicación de los ajustes por inflación impositivos, temática abordada en otro apartado).

## **V.2. Disposiciones de fondos a favor de terceros (art. 73 LIG)**

El instituto del título ha sufrido importantes modificaciones en su regulación, entre los cuales cabe mencionar:

- Eliminación de la dispensa para los retiros efectuados por socios de SRLs. Respecto del supuesto en que los cuotapartistas registraran deudas en cuenta corriente con la sociedad al 31/12/2017 por retiro de fondos, sin que existieran utilidades a distribuir, Malvitano considera que la presunción del art. 73 LIG operará respecto a eventuales nuevos retiros.
- La inclusión de aclaraciones (conceptualmente redundantes, aunque bienvenidas en tren de evitar conflictos) respecto de cuándo no procede la presunción, como por ejemplo: i) se trate de disposiciones de bienes a favor de terceros en condiciones de mercado (art. 73, 3er párrafo, LIG); Malvitano analiza si la entrega de fondos que reúnan esas características se encuentra o no comprendida en tal excepción; ii) se trate de transacciones con vinculadas del exterior y corresponda su análisis de acuerdo con las pautas vigentes en materia de precios de transferencia.
- Se faculta a la reglamentación para la fijación de la tasa anual de interés presunto, de acuerdo a “cada tipo de moneda”.
- En el caso de disposición de bienes (art. 73, inc. b), se presume una ganancia gravada equivalente al 8 % del valor corriente en plaza para el caso de inmuebles y del 20 % para el resto, con las dificultades consecuentes para establecer valores corrientes en plaza.

Malvitano desarrolla sus consideraciones respecto de las imprecisiones reglamentarias preexistentes, que deberían ser motivo de reconsideración en el nuevo texto.

## **V.3. Limitaciones a la deducción del costo del endeudamiento**

Los nuevos cuarto párrafo y siguientes del inciso a) del art. 81 LIG modificaron las reglas del régimen denominado “capitalización exigua”.

En tal sentido, se reestructura la limitación a la deducción de costos financieros en los siguientes términos:

- Se aplica a los sujetos comprendidos en el artículo 49.
- Alcanza a los intereses de deudas de carácter financiero —excluyéndose, en consecuencia, las deudas generadas por adquisiciones de bienes, locaciones y prestaciones de servicios relacionados con el giro del negocio—. A estos fines el término “intereses” comprende, asimismo, las diferencias de cambio y, en su caso, actualizaciones, generadas por los pasivos que los originan, en la medida en que no resulte de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 95 de esta ley, conforme lo dispuesto en su segundo párrafo.
- El acreedor deberá ser un sujeto, residente o no en la República Argentina, vinculado en los términos del artículo incorporado a continuación del artículo 15 de la ley.
- Dichos conceptos serán deducibles del balance impositivo al que corresponda su imputación, no pudiendo superar tal deducción el monto anual que al respecto

establezca el Poder Ejecutivo nacional o el equivalente al treinta por ciento (30%) de la ganancia neta del ejercicio que resulte antes de deducir tanto los costos financieros aquí aludidos como las amortizaciones previstas en esta ley, el que resulte mayor.

La reglamentación podrá determinar la inaplicabilidad de la aludida limitación cuando el tipo de actividad que desarrolle el sujeto así lo justifique.

Al límite aplicable se le podrá adicionar el excedente que se haya acumulado en los tres ejercicios fiscales inmediatos anteriores, por resultar inferior —en cualquiera de dichos períodos— el monto de los intereses efectivamente deducidos respecto del límite aplicable, en la medida que dicho excedente no hubiera sido aplicado con anterioridad conforme el procedimiento dispuesto en este párrafo.

Los intereses que, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, no hubieran podido deducirse, podrán adicionarse a aquellos correspondientes a los cinco ejercicios fiscales inmediatos siguientes, quedando sujetos al mecanismo de limitación descripto.

La limitación no será de aplicación en los siguientes supuestos:

1. Para las entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones.
2. Para los fideicomisos financieros constituidos conforme a las disposiciones de los artículos 1.690 a 1.692 del Código Civil y Comercial de la Nación.
3. Para las empresas que tengan por objeto principal la celebración de contratos de leasing en los términos, condiciones y requisitos establecidos por los artículos 1.227 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y en forma secundaria realicen exclusivamente actividades financieras.
4. Por el monto de los intereses que no exceda el importe de los intereses activos.
5. Cuando se demuestre fehacientemente que, para un ejercicio fiscal, la relación entre los intereses sujetos a la limitación del cuarto párrafo de este inciso y la ganancia neta a la que allí se alude, resulta inferior o igual al ratio que, en ese ejercicio fiscal, el grupo económico al cual el sujeto en cuestión pertenece posee por pasivos contraídos con acreedores independientes y su ganancia neta, determinada de manera análoga a lo allí dispuesto, según los requisitos que establezca la reglamentación; o
6. Cuando se demuestre fehacientemente, conforme lo disponga la reglamentación, que el beneficiario de los intereses a los que alude dicho cuarto párrafo hubiera tributado efectivamente el impuesto respecto de tales rentas, con arreglo a lo dispuesto en esta ley.

Un primer problema que surge ante las disposiciones del cuarto párrafo y siguientes del inciso a) del artículo 81 LIG, es el concepto de intereses (término que, se reitera y a esos fines, incluye asimismo las diferencias de cambio y actualizaciones) **activos** que deberán compararse con los pasivos.

Coincidiendo con Malvitano, la falta de especificidad de la ley al respecto lleva a concluir que se refiere a la totalidad de los intereses, incluyendo por ende los de naturaleza comercial (financiación a clientes).

La introducción de un ratio intragrupo entre intereses sujetos a limitación y ganancia, presenta diversos matices controvertidos, analizados por Malvitano, entre los que se cuentan:

- i) concepto de ganancia neta y amortizaciones (contables versus impositivos);
- ii) concepto de grupo;
- iii) mecanismos de demostración fehaciente de la situación del grupo en el extranjero.

En cuanto a la exclusión de la limitación a la deducción en caso de que el beneficiario de los intereses hubiera tributado efectivamente el impuesto respecto de tales rentas, atendiendo a la naturaleza antielusión de la norma, parecería ser que la utilidad sujeta a impuesto no debería ser inferior al monto de los mencionados intereses; en caso contrario, podría existir una intención de trasladar quebranto impositivo hacia el deudor.

La aplicación simultánea de la limitación en la deducción, con la retención al beneficiario de los intereses (que la ley emplea, eufemísticamente, para dejar en claro que los intereses son, no obstante, ganancia gravada para el acreedor), genera una cuestionable doble imposición, cabiendo preguntarse por qué no se dio al exceso de intereses no deducibles el tratamiento de dividendo.

Finalmente cabe acotar que el reglamento debería disponer que las diferencias de cambio generadas por endeudamiento con el exterior quedan comprendidas en la limitación, ya que por no constituir ganancias gravadas de fuente argentina para el acreedor no quedan comprendidas en la exclusión del punto 6.; nótese que ello es independiente de que la deuda devengue o no intereses, y consecuencia de que podría ser representativo de un uso abusivo del endeudamiento (sin perjuicio de que, en un marco más abarcativo del caso, el Fisco pretenda sostener que la realidad económica indica que se está en presencia de un aporte de capital y no de un préstamo, cuestionando la deducción de tales diferencias en su totalidad).

#### **V.4. Normas para contemplar los efectos de la inflación**

No es novedoso que los Gobiernos de nuestro país se opongan a la aplicación de mecanismos generales de ajuste inflación.

Las críticas a esa postura son extensas y agotadoramente conocidas por todos los interesados, por lo que no serán aquí repetidas.

Dado que el enfoque de la reforma es hacer hincapié en la posibilidad de actualizar, hacia adelante, valores originados en el futuro (fundamentalmente, nuevas inversiones), es preciso señalar algunas distorsiones que presenta el esquema diseñado por la ley N° 27.430:

- 1) Las inversiones en bienes amortizables efectuadas entre el 31.12.2017 y la fecha de cierre del último ejercicio anterior a la vigencia de la reforma, no están comprendidos en el revalúo impositivo opcional ni en el régimen de actualización automática para inversiones posteriores a la reforma.
- 2) En materia de quebrantos, está prevista la actualización de aquellos generados a partir de la reforma, quedando la incógnita del tratamiento aplicable a los que se hubieran acumulado con anterioridad.

#### **V.5. Derogación de la limitación a la deducción de prestaciones de tecnología no registradas**

Si bien no resulta cuestión específicamente atinente al tratamiento de la renta corporativa, cabe mencionar la derogación del artículo 9° de la ley 22.426, que prohibía la deducción de los pagos por contratos no registrados ante el INPI.

### **VI. PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

Acotadas pero contundentes son las reformas introducidas al régimen de precios de transferencia.

La primera de ellas está referida a la extensión de la presunción de que las operaciones efectuadas por un sujeto residente con uno no residente no serán consideradas ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes, cuando el último esté situado en jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, resultando en consecuencia de aplicación los métodos de determinación de precios regulados por el artículo 15 LIG.

A los fines apuntados se incorporaron como artículos sin número a continuación del artículo sin número agregado a continuación del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, siguientes:

***“ARTÍCULO ...- Jurisdicciones no cooperantes.*** *A todos los efectos previstos en esta ley, cualquier referencia efectuada a “jurisdicciones no cooperantes”, deberá entenderse referida a aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información.*

*Asimismo, se considerarán como no cooperantes aquellos países que, teniendo vigente un acuerdo con los alcances definidos en el párrafo anterior, no cumplan efectivamente con el intercambio de información.*

*Los acuerdos y convenios aludidos en el presente artículo deberán cumplir con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se haya comprometido la República Argentina.*

*El Poder Ejecutivo nacional elaborará un listado de las jurisdicciones no cooperantes con base en el criterio contenido en este artículo.*

***ARTÍCULO ...- Jurisdicciones de baja o nula tributación.*** *A todos los efectos previstos en esta ley, cualquier referencia efectuada a “jurisdicciones de baja o nula tributación”, deberá entenderse referida a aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al sesenta por ciento (60%) de la alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 69 de esta ley.”*

En segundo término se introduce la obligación de acreditar la razonabilidad de la retribución acordada a los intermediarios en la triangulación de operaciones, tanto de exportación como de importación.

Asimismo se modificó el alcance del denominado “sexto método”, quedando el mismo como método de aplicación residual, a las operaciones de exportación de bienes con cotización en las que intervenga un intermediario internacional que cumplimente algunas de las condiciones estipuladas en la norma, o que se encuentre ubicado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, respecto de las cuales no se cumplimente la obligación de registrar los contratos respectivos en un registro especial que se creará al efecto.

Las últimas dos modificaciones serán tratadas en sendos apartados a continuación y especialmente por Cecilia Golemborg.

La definición de control (artículo incorporado a continuación del 15 LIG) no sufrió mayores cambios, excepto por haberse “blanqueado” la facultad reglamentaria de establecer los supuestos de vinculación a los que alude el primer párrafo del citado artículo.

#### **VI.1. Operaciones de triangulación con intervención de un intermediario internacional**

Cuando se trate de operaciones de importación o exportación de mercaderías en las que intervenga un intermediario internacional que no sea, respectivamente, el exportador en origen o el importador en destino de la mercadería, se deberá acreditar —de acuerdo con lo que establezca la reglamentación— que la remuneración que éste obtiene guarda relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados en la operación, siempre que se verifique alguna de las siguientes condiciones:

- a) que el intermediario internacional se encuentre vinculado con el sujeto local en los términos del artículo incorporado a continuación del artículo 15;
- b) que el intermediario internacional no esté comprendido en el inciso anterior, pero el exportador en origen o el importador en destino se encuentre vinculado con el sujeto local respectivo en los términos del artículo incorporado a continuación del artículo 15.

Al supeditarse la aplicación de la prueba de razonabilidad de la retribución del intermediario a la verificación de alguna de estas dos últimas condiciones, cabe preguntarse sobre quién recaerá la carga de la prueba “negativa” al respecto, si sobre el contribuyente (postura que seguramente adoptará la reglamentación y/o la AFIP) o sobre esta última. Como toda prueba “negativa”, probablemente planteará sus dificultades.

La hipótesis del inciso a) es superabundante, por estar comprendida en las pautas generales de vinculación sometidas al análisis de precios de transferencia; por eso llama la atención de quien esto escribe, la circunstancia de que no se hayan incluido en la obligación de acreditar la razonabilidad de la remuneración a los intermediarios ubicados en países no cooperantes o de baja o nula tributación.

De no demostrarse que no se verifican las dos circunstancias apuntadas, entonces se abrirá paso a otra demostración fáctica seguramente compleja, cual es acreditar que la remuneración del intermediario guarda razonable relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados, lo que requerirá una tortuosa recopilación de información, sobre la cual se explaya Goldemberg.

La ley no establece las consecuencias de la falta de acreditación del extremo requerido (que la retribución no es razonable, es decir que es excesiva, por cuanto de ser escasa no habría consecuencias). No obstante, no cabe inferir otra consecuencia que la imposibilidad de deducir (en su caso, no considerar costo de adquisición) la cuantía de remuneración que exceda lo razonable (la misma solución que propone Goldemberg, por la vía de considerar dicho exceso como mayor precio para el exportador o menor costo de la importación).

La intervención de más de un intermediario, así como la existencia de diferencias de magnitud en los precios aplicados “en las puntas”, son situaciones potencialmente conflictivas, analizadas por Goldemberg.

#### **VI.2. Operaciones de exportación de bienes con cotización, con intervención de un intermediario internacional**

Como ya se adelantara, para el caso de operaciones de exportación de bienes con cotización en las que intervenga un intermediario internacional que cumplimente alguna de las condiciones a que hace referencia el sexto párrafo del artículo 15, o se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, los contribuyentes deberán, **sin perjuicio del requerimiento de acreditar la razonabilidad de la retribución del intermediario como exige el mencionado párrafo**, realizar el registro de los contratos celebrados con motivo de dichas operaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con las disposiciones que a tal fin determine la reglamentación, el cual deberá incluir las características relevantes de los contratos como así también, y de corresponder, las diferencias de comparabilidad que generen divergencias con la cotización de mercado relevante para la fecha de entrega de los bienes, o los elementos considerados para la formación de las primas o los descuentos pactados por sobre la cotización. De no efectuarse el registro correspondiente en los términos que al respecto establezca la reglamentación o de efectuarse pero no cumplimentarse lo requerido, se determinará la renta de fuente argentina de la exportación considerando el valor de cotización del bien del día de la carga de la mercadería —cualquiera sea el medio de transporte—, incluyendo los ajustes de comparabilidad que pudieran corresponder, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado con el intermediario internacional.

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá extender la obligación de registro a otras operaciones de exportación de bienes con cotización (se entiende que se refiere a operaciones sin intervención de intermediarios, o bien con intermediarios e importadores no vinculados).

La ley parece clara en cuanto a que la obligación del séptimo párrafo no excluye la del sexto, lo cual resulta razonable. La incorporación en el séptimo párrafo del caso de intermediarios ubicados en países no cooperantes o de baja o nula tributación, abre el interrogante acerca de, en el marco de este último párrafo, deberá asimismo acreditarse la razonabilidad de la remuneración de aquél.

## **VII. RENTA DE FUENTE EXTRANJERA: TRANSPARENCIA FISCAL Y PAGO A CUENTA POR IMPUESTOS ANALOGOS**

### **VII.1. Transparencia fiscal internacional**

A modo de norma antidiferimiento, se introdujeron incisos específicos dentro del art. 133 LIG, relativos a la imputación de ciertas rentas que, en general y de otro modo, podrían ser motivo de sujeción al tributo recién a muy largo plazo.

Por medio de tales incisos se amplía considerablemente la aplicación del denominado “principio de transparencia fiscal”, que implica determinar el tratamiento aplicable a determinadas rentas prescindiendo de la consideración de la figura del ente o vehículo jurídico que las obtuviera, y asumir que las mismas fueron obtenidas “de manera directa” por la persona humana a la cual la ley las atribuye.

En tal sentido, no parecería existir espacio para apartarse de la consecuencia más literal de tal atribución directa al sujeto “socio”, esto es de aplicar la totalidad de las disposiciones de la ley inherentes a la naturaleza de la renta en cabeza del mencionado socio, sin perjuicio de la regla de enunciación del listado de rentas a considerar basada en el ejercicio del ente que las obtiene formalmente.

Como señala Goldemberg, tal principio podría llevar a situaciones de difícil resolución técnica, como ocurriría en el caso de operaciones entre la sociedad y su socio, desde el momento en que nadie podría operar consigo mismo.

Se analiza a continuación los casos comprendidos en cada uno de los aludidos incisos, para luego comentar las disposiciones de aplicación común a todos ellos.

#### **VII.1.1. Ganancias obtenidas por intermedio de trusts, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas**

Las ganancias obtenidas por trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, cuyo objeto principal sea la administración de activos, se imputarán por el **sujeto residente que los controle** al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos o arreglos – inciso d) del art. 133-.

Se entenderá que un sujeto posee el control cuando existan evidencias de que los activos financieros se mantienen en su poder y/o son administrados por dicho sujeto (comprendiendo entre otros los siguientes casos: (i) cuando se trate de trusts, fideicomisos o fundaciones, revocables, (ii) cuando el sujeto constituyente es también beneficiario, y (iii) cuando ese sujeto tiene poder de decisión, en forma directa o indirecta para invertir o desinvertir en los activos, etcétera.

Un aspecto a definir está dado por la definición de “objeto principal”; al respecto pueden plantearse al menos dos pautas diferentes, como serían por un lado los ingresos y por el otro la magnitud de activos, pudiendo establecerse que se considerará que el objeto principal es la administración de activos cuando cualesquiera de ambos parámetros fuera el de mayor magnitud.

#### **VII.1.2. Ganancias obtenidas por la participación en sociedades u otros entes del exterior sin personalidad fiscal**

El inciso e) del art. 133 LIG regula el caso de:

- Sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior o bajo un régimen legal extranjero,
- Que no posean personalidad fiscal en la jurisdicción en que se encuentren constituidas, domiciliadas o ubicadas, debiendo atribuirse en forma directa las rentas obtenidas a sus accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios.
- Cuyas rentas no se encuentren comprendidas en las disposiciones de los incisos a) a d) precedentes
- Las que serán imputadas por sus accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios, **residentes en el país**, al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de tales sociedades o entes, en la proporción de su participación.

Obsérvese que detentar personalidad fiscal en la jurisdicción de ubicación del ente lo deje fuera de este inciso, no obstante esa circunstancia no quita que las ganancias del ente pudieran quedar encuadradas en el inciso f), el que se analiza en el subacápite que sigue.

#### **VII.1.3. Ganancias obtenidas por la participación directa o indirecta en entes controlados, sin sustancia y de baja tributación -nuevo inciso f) del art. 133 LIG-**



Las ganancias de los residentes en el país obtenidas **por su participación directa o indirecta** en sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, se imputarán por sus accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios **residentes en el país** al ejercicio o año fiscal en el que finalice el correspondiente ejercicio anual de los primeros, en tanto se cumplan **concurrentemente** los requisitos previstos en los apartados que a continuación se detallan:

1. Que las rentas en cuestión no reciban un tratamiento específico conforme las disposiciones de los incisos a) a e) precedentes.

2. Que los residentes en el país —por sí o conjuntamente con (i) entidades sobre las que posean control o vinculación, (ii) con el cónyuge, (iii) con el conviviente o (iv) con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente, descendente o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive— tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en el patrimonio, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente.

Este requisito se considerará cumplido, cualquiera sea el porcentaje de participación, cuando los sujetos residentes en el país, respecto de los entes del exterior, cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

- (i) Posean bajo cualquier título el derecho a disponer de los activos del ente.
- (ii) Tengan derecho a la elección de la mayoría de los directores o administradores y/o integren el directorio o consejo de administración y sus votos sean los que definen las decisiones que se tomen.
- (iii) Posean facultades de remover a la mayoría de los directores o administradores.
- (iv) Posean un derecho actual sobre los beneficios del ente.

También se considerará cumplido este requisito, cualquiera sea el porcentaje de participación que posean los residentes en el país, cuando en cualquier momento del ejercicio anual el valor total del activo de los entes del exterior provenga al menos en un treinta por ciento (30%) del valor de inversiones financieras generadoras de rentas pasivas de fuente argentina consideradas exentas para beneficiarios del exterior, en los términos del inciso w) del artículo 20.

En todos los casos, el resultado será atribuido conforme el porcentaje de participación en el patrimonio, resultados o derechos.

3. Cuando la entidad del exterior no disponga de la organización de medios materiales y personales necesarios para realizar su actividad, o cuando sus ingresos se originen en:

- (i) Rentas pasivas, cuando representen al menos el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos del año o ejercicio fiscal.
- (ii) Ingresos de cualquier tipo que generen en forma directa o indirecta gastos deducibles fiscalmente para sujetos vinculados residentes en el país.

***En los casos indicados en el párrafo anterior, serán imputados conforme las previsiones de este inciso únicamente los resultados provenientes de ese tipo de rentas.***

4. Que el importe efectivamente ingresado por la entidad no residente, en el país en que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada, imputable a alguna de las rentas comprendidas en el apartado 3 precedente, correspondiente a impuestos de idéntica o similar naturaleza a este impuesto, sea inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto societario que

hubiera correspondido de acuerdo con las normas de la ley del impuesto. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que esta condición opera, si la entidad del exterior se encuentra constituida, domiciliada o radicada en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

***Idéntico tratamiento deberá observarse respecto de participaciones indirectas en entidades no residentes que cumplan con las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.***

Las disposiciones de este apartado no serán de aplicación cuando el sujeto local sea una entidad financiera regida por la ley 21.526, una compañía de seguros comprendida en la ley 20.091 y tampoco en los casos de fondos comunes de inversión regidos por la ley 24.083.

Nótese que en el inciso f) bajo análisis, se introduce la cuestión de participación "indirecta" (no configurada en los incisos d) y e) y, por ende, no aplicable a esos supuestos) y con relación a toda la cadena de participaciones sucesivas (véase el último párrafo resaltado).

Esta última cuestión obligará a analizar toda la cadena de participaciones sucesivas, hasta llegar a un eslabón "opaco" (es decir, no transparente en los términos del art. 133 LIG), cabiendo interpretar que todas las ganancias generadas por "debajo" de dicho eslabón quedan fuera del régimen de transparencia.

En similar línea de razonamiento, cable plantear qué ocurriría en el caso de una estructura constituida por el control directo de un trust extranjero, el que resulta a su vez titular controlante de sociedades que obtienen rentas pasivas, sometidas a un régimen tributario que implique ingresar menos del 75% del impuesto societario argentino.

Una primera visión del caso llevaría a concluir que dichas rentas están sometidas a la transparencia del art. 133, sea por vía del inciso d) si esas ganancias fueran registradas por el trust por medio del devengado o, en caso contrario, por vía del inciso f).

En la variante en que las sociedades controladas por el trust controlado no cumplieran algunos de los requisitos enumerados por este último inciso, sus rentas se imputarían recién cuando se verifiquen los hechos generadores de su imputación en cabeza del trust transparente (distribuciones de utilidades de las mencionadas sociedades).

Estas cuestiones serán dilucidadas por Goldemberg.

Los requisitos previstos por el inciso f) del art. 133 LIG merecen algunas consideraciones, que se vuelcan a continuación.

#### **VII.1.3.1. Concepto de control o vinculación**

Un aspecto a definir es la oportunidad (momento específico del tiempo) en que se miden los parámetros a los que se condiciona la definición de control o vinculación, como por ej. el porcentaje de participación o los valores de activos que generan rentas pasivas de fuente argentina, los cuales están lógicamente sujetos a vaivenes contractuales (al igual que ocurre con los otros parámetros, aunque seguramente con menor volatilidad).

En esa línea debería establecerse cómo proceder en los tramos de discontinuidad en la verificación de los parámetros establecidos.

En el caso del inciso 2., segundo párrafo (presunciones del cumplimiento del requisito de control) debería aclararse si las mismas se consideran, igualmente, en forma conjunta para todos los sujetos vinculados o emparentados.

#### **VII.1.3.2. Concepto de “sustancia”**

El inciso 3. refiere a la necesidad de disponer de la **organización de medios materiales y personales necesarios para realizar la actividad del ente**, cuya ausencia lo vuelve transparente aún cuando sus rentas no fueran pasivas.

Con las dificultades que ello conlleva, sería conveniente fijar pautas reglamentarias referenciales para definir el concepto resaltado, que actúen a manera de “puerto seguro”, pero sin excluir otras circunstancias que serían motivo de evaluación en cada caso particular.

#### **VII.1.3.2. Comparación con el impuesto societario nacional**

La comparación impuesta por el inciso 4. emplea, como uno de sus términos, la expresión “impuesto societario” de nuestra ley.

Hasta la entrada en vigor de la reforma esa expresión hubiera resultado unívoca (35% de la ganancia impositiva).

Con las normas hoy vigentes entramos en la ambigüedad: tenemos tasas proporcionales con vigencia temporal y retención sobre los dividendos. Partiendo de la base de que esta última recae, formalmente, sobre los accionistas y no sobre la sociedad (lo que permite descartar este componente de la ecuación), debería establecerse reglamentariamente que la tasa nominal de comparación sería la vigente conforme el art. 69 LIG a la fecha de cierre del ejercicio del ente foráneo.

#### **VII.1.4. Reglas aplicables a los tres tipos de transparencia**

El último párrafo del art. 133 dispone:

“La imputación de las rentas a que se refieren los incisos d), e) y f) precedentes, será aquella que hubiera correspondido aplicar por el sujeto residente en el país, conforme la categoría de renta de que se trate, computándose las operaciones realizadas en el ejercicio de acuerdo con las normas relativas a la determinación de la renta neta, conversión y alícuotas, que le hubieran resultado aplicables de haberlas obtenido en forma directa. La reglamentación establecerá el tratamiento a otorgar a los dividendos o utilidades originados en ganancias que hubieran sido imputadas en base a tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al que refiera la distribución de tales dividendos y utilidades.”

Esta modalidad de imputación da origen a situaciones conflictivas por su superposición con la regla general contenida en cada uno de los citados incisos, relativa a considerar los beneficios correspondientes al ejercicio comercial o fiscal del ente respectivo.

Es decir, se parte del devengado contable del ente (o del principio que corresponda aplicar para elaborar sus estados contables) y se complementa con el filtro del principio de imputación de la ganancia que corresponda según la LIG. De dicho filtrado pueden surgir situaciones asimétricas cuyo tratamiento debería resolver la reglamentación. A modo de ejemplo:

1) Supongamos un vehículo que cierra ejercicio en junio de 2019 e incluye un ingreso devengado que se percibe en julio 2019. ¿Cuándo imputa esa renta la persona humana residente en Argentina? ¿En el 2019 o en el 2020?

2) Ahora supongamos, en el mismo caso, que la renta se devengó en julio 2019 (será incluida en balance junio 2020) y se percibió en el mismo mes de devengamiento. ¿Cuándo imputa esa renta la PH residente en Argentina? Si se privilegia el ejercicio del ente como rango de enumeración de operaciones, la ganancia se imputaría al 2020 a pesar de que el criterio de imputación de la PH sería al 2019 por percibido.

En la misma línea de razonamiento se enrola la cuestión referida a las utilidades generadas hasta la fecha de cierre del último ejercicio no comprendido en el nuevo régimen de transparencia (normas de transición; siguiendo el ejemplo anterior, las utilidades correspondientes al ejercicio cerrado en junio de 2018 no estarían comprendidas en las normas de transparencia).

La delegación en la reglamentación de establecer el tratamiento a otorgar a los dividendos integrados por rentas ya imputadas al balance impositivo, no puede sino entenderse como la facultad de establecer la regla práctica de imputación, resultado obvio que no pueden volver a gravarse los conceptos ya sometidos a imposición.

En tal sentido, se impone una solución lo más sencilla y práctica que sea posible (habida cuenta de la complejidad que presenta la liquidación del impuesto en términos generales), como sería agotar primero la utilidad más antigua (excluida del régimen de transparencia), a continuación la no imputada (preservando la renta fiscal y la transparencia en si misma), o bien agotando primero la renta ya imputada. En cualquier caso, la "cuenta corriente" respectiva debería llevarse en moneda del país de origen de la renta (aunque sea obvia tal aclaración).

Análoga situación se presenta con relación a utilidades anteriores a la fecha de blanqueo de bienes, cuestión sobre la que ilustra Goldemberg.

Finalmente destacamos que no deben someterse a nueva imposición en nuestro país, los dividendos percibidos de sociedades comprendidas en el art. 69 LIG, los que debieron ser, oportunamente, motivo ya de imposición.

## **VII.2. Pago a cuenta por impuestos análogos del exterior**

La reforma introducida en el tema del título por la ley de reforma es bastante modesta, y se correlaciona con las nuevas disposiciones en materia de transparencia fiscal más arriba comentadas.

Es así que la modificación se centra en el artículo 172, el que quedó redactado en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 172.- Si las entidades comprendidas en los incisos d), e) y f) del artículo 133 están constituidas, domiciliadas o ubicadas en países que someten a imposición sus resultados, sus accionistas, socios, partícipes, titulares, controlante o beneficiarios, residentes en el país computarán los impuestos análogos efectivamente pagados por las sociedades y otros entes del exterior, en la medida que resulte de aplicarles la proporción que deban considerar para atribuir esos resultados, conforme lo determine la reglamentación. El ingreso del impuesto así determinado se atribuirá al año fiscal al que deban imputarse las ganancias que lo originen, siempre que tenga lugar antes del vencimiento fijado para la presentación de la declaración jurada de los accionistas, socios partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes o

de la presentación de la misma, si ésta se efectuara antes de que opere aquel vencimiento.

Cuando aquellos países sólo graven utilidades distribuidas por las sociedades y otros entes consideradas en este artículo, los impuestos análogos aplicados sobre ellas se atribuirán al año fiscal en el que se produzca su pago. Igual criterio procederá respecto de los impuestos análogos que esos países apliquen sobre tales distribuciones, aun cuando adopten respecto de dichas entidades el tratamiento considerado en el párrafo precedente.”

Es casi “coloquial” la expresión del artículo glosado (“computarán los impuestos”) en tanto, dando por sentada su inserción en el Capítulo IX referida cómputo como pago a cuenta del impuesto argentino, omite apuntar esta última circunstancia.

Como advierte Goldemberg, si por no contar el ente extranjero con personalidad fiscal, el socio quedara obligado al ingreso del impuesto análogo, el cómputo del mismo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias resultará procedente, tanto en los supuestos del inciso d) como del propio inciso e) del art. 133 LIG.

En otro orden de ideas, la disociación entre los momentos de: i) imputación de la ganancia; y ii) conversión a moneda nacional del pago a cuenta, produce efectos distorsivos en la equidad, como consecuencia del desmedro del tipo de cambio entre el momento del efectivo ingreso del impuesto análogo y su efectivo cómputo.

En la misma línea de razonamiento, el ingreso del impuesto extranjero con posterioridad al pago del argentino puede frustrar el cómputo efectivo de aquél, de no generarse utilidades gravadas posteriores de la misma fuente, circunstancia no subsanada por la mera admisión del cómputo posterior; la única solución sería admitir la repetición del impuesto argentino ingresado en exceso, empleando en la conversión del pago a cuenta el tipo de cambio vigente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada original.

Un aspecto que debería regular la reglamentación sería la forma de discriminar el pago a cuenta entre las fuentes productoras, a los fines de la apropiación al impuesto cedular regulado por el tercer párrafo del artículo 90 LIG.

Goldemberg, además de criticar severamente la falta de solución para el problema de las retenciones sobre ganancias que los dos países consideran de su propia fuente, hace un repaso de las características y condiciones generales del cómputo de los impuestos análogos como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, reseñando las siguientes cuestiones de equidad o necesidad de regulación normativa:

1) Cómputo amplio del impuesto indirecto ingresado por el vehículo del exterior, no limitado a las sociedades por acciones ni sujeto a requisitos de participación mínima.

2) Admisión del cómputo del impuesto extranjero con independencia de la definición de fuente que otorgue a la renta nuestra ley, hasta el límite del incremento en la obligación fiscal generada por dicha renta en particular.

## **VIII. COLOFON**

La mera circunstancia de que el contenido de este informe sirva de base para la discusión de tan trascendente cuestión, como es la profunda reforma a la ley de impuesto a las ganancias

instaurada por la Ley N° 27.430, constituye la mejor recompensa para el esfuerzo de su elaboración.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre de 2018.

***DR. CP CESAR MANUEL CAVALLI***

Relator-Comisión N° 2